

07/15

1

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO
_____/2012.

ACTOR: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO,
ESTADO DE SONORA.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
PRESENTE.-

JOEL ESCALANTE DIAZ, Síndico Municipal del Ayuntamiento del San Ignacio Río Muerto, Estado de Sonora, con las facultades que me confiere en representación del mismo el artículo 70, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, y en términos de la jurisprudencia del Pleno de este H. Tribunal de rubro "*CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE LA REPRESENTACIÓN ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO QUE EL LEGISLADOR O EL AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS SEÑALADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)*", personalidad que acredito con copia certificada del acta de instalación del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto para el período constitucional 2009-2012 de fecha 16 de septiembre de 2009, mediante la cual tomé protesta con el carácter mencionado, con efectos a partir de esa misma fecha; documento que se anexa a la presente demanda; señalando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en _____

_____, y autorizando como delegados a los Licenciados en Derecho _____

_____, indistintamente, con el debido respeto acudo ante
Ustedes para exponer:

Que con fundamento en el artículo 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la fracción I del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado dispositivo constitucional, ocurro a presentar en nombre de mi representado demanda de

01110
11110
SIA



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
REGISTRACION DE TRAMITES DE
CONSTITUCIONALES Y D.
INCONSTITUCION

controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Atento a ello, y de conformidad con lo establecido por el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de la materia, expongo lo siguiente:

1.- LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO DEMANDADO Y SU DOMICILIO.

a) El Poder Ejecutivo Federal con domicilio en Residencia Oficial de los Pinos, en la ciudad de México, Distrito Federal, por ser a quien corresponde la regulación de las aguas nacionales.

b) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con domicilio en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Tlalpan, México, Distrito Federal C.P. 14210, por ser el superior jerárquico del órgano que pronunció el acto objeto de la controversia en términos del artículo 10 fracción II de la Ley de la Materia.

c) Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]. Con domicilio en Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 4209, Col. Jardines en la Montaña, Tlalpan, México, Distrito Federal, C.P. 14210, por ser el órgano que pronunció el acto objeto de la controversia en términos del artículo 10 fracción II de la Ley de la Materia.

d) El Organismo de Cuenca Noroeste, de la [Comisión Nacional del Agua], con domicilio ubicado en calle Comonfort y Paseo Cultura, Centro de Gobierno, Edificio México, colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, C.P. 83280. Por ser el superior jerárquico del órgano que pronunció el acto objeto de la controversia en términos del artículo 10 fracción II de la Ley de la Materia.

e) La Dirección de Administración del Agua, del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, con domicilio en calle Comonfort y Paseo Cultura, Centro de Gobierno, Edificio México, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, C.P. 83280. Por ser el órgano que pronunció el acto objeto de la controversia en términos del artículo 10 fracción II de la Ley de la Materia.

f) El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora con domicilio en Palacio de Gobierno, Dr. Paliza y Comonfort, C.P. 83260, en Hermosillo Sonora, por ser el

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN DE TRÁMITES DE
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCION

poder que pronunció el acto objeto de la controversia en términos del artículo 10 fracción II de la Ley de la Materia.

g) El organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, denominado Fondo de Operación de Obras Sonora SI, con domicilio en Boulevard Agustín de Vildósola casi esquina con Avenida de las Culturas, en Hermosillo, Sonora, por ser el órgano que pronunció el acto objeto de la controversia en términos del artículo 10 fracción II de la Ley de la Materia.

2.- TERCEROS INTERESADOS.

La Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora, con domicilio en Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora.

3.- NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

a) Del Poder Ejecutivo Federal cualquier procedimiento administrativo tendiente a resolver la autorización del proyecto de construcción u operación del Acueducto Independencia para trasvasar aguas del Río Yaqui a la Cuenca Hidrológica del Río Sonora.

b) Del Poder Ejecutivo Federal por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la resolución contenida en el oficio No. S.G.P.A.DGIRA.-DG.-1633/11, de fecha 23 de febrero de 2011, por el cual se autoriza de manera condicionada la manifestación de impacto ambiental presentada por el Fondo de Operación de Obras Sonora SI, respecto del proyecto denominado "Acueducto Independencia", con pretendida ubicación en los municipio de Hermosillo, Ures, Mazatán, Villa Pesquera y Soyopa, en el estado de Sonora.

c) Del Poder Ejecutivo Federal, por medio de la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, el trámite y resolución de los expedientes SON-0-0658-14-05-10, SON-0-0659-14-05-10 y SON-0-0529-13-04-11 que derivaron de la solicitud de asignación de aprovechamiento de aguas superficiales presentada por la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora, y la expedición de los títulos de asignación: 02SON150083/09HBDA10 mediante el cual se asignan 40'182,450.60

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TRÁMITES DE
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCION

millones de metros cúbicos; el título de asignación 02SON150085/09HBDA10, mediante el cual se asignan 11'720,000.00 millones de metros cúbicos, y; el título 02SON150734/09HBDA11, mediante el cual se asignaron 8'582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del Río Yaqui a la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora.

d) Del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la elaboración, aprobación y ejecución del Programa SONORA SI (Proyecto Sonora Sistema Integral). Así como cualquier procedimiento administrativo tendiente a resolver la autorización del proyecto de construcción u operación del Acueducto Independencia para trasvasar aguas del Río Yaqui a la cuenca hidrológica del Río Sonora.

e) Del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora por medio del Fondo de Operación de Obras Sonora SI. La licitación pública No. 55201001-001-10, (parte integrante del Programa Sonora SI) relativa al proyecto integral para el diseño y construcción del "Acueducto Independencia", que incluye obra de toma y acueducto de la presa "Plutarco Elías Calles", en todas sus etapas y los actos que de ella se deriven, especialmente la emisión del fallo de la misma, la asignación de la obra a un grupo de empresas representadas con el carácter de Asociante por Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V., la firma del contrato de obra correspondiente, así como la construcción y operación por sí o por medio de terceros del Acueducto Independencia que tiene por objeto sustraer agua de la cuenca del Río Yaqui en la presa Plutarco Elías Calles y trasladarla a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Sin que sea obstáculo para la procedencia de la presente demanda el que algunos de los actos cuya invalidez se demanda ya se hayan consumado, en virtud de que continúan produciendo sus efectos, no solo para el Municipio de San Ignacio Río Muerto, sino para todos los que viven al margen de la cuenca hidrológica del Río Yaqui, ya que producen daños a la salud pública ocasionados por problemas de falta de abasto de agua y que pueden originar impactos ambientales significativos, y causan o pueden causar desequilibrios ecológicos, que rebasan los límites y condiciones establecidas en la Ley y se vulnera la esfera de atribuciones de los Municipios al desconocer las prerrogativas que les otorga el artículo 115 de la Constitución General, siendo aplicable al caso en comento la siguiente jurisprudencia:

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GE
DISTRIBUCIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

Registro: 178012

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Julio de 2005

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 78/2005

Página: 914

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE IMPUGNEN ACTOS CONSUMADOS.

El artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los supuestos en los cuales resulta improcedente la controversia constitucional, sin que entre ellos se encuentre el relativo a que los actos que la motiven tengan el carácter de consumados, además de que esta hipótesis tampoco se desprende de ninguna otra disposición de la propia ley. En tal virtud, el hecho de que la emisión de un decreto o una ley por parte del Congreso de la Unión, de alguna de sus Cámaras o de algún Congreso Local pueda estimarse consumado por haber concluido el procedimiento legislativo, no da lugar a la improcedencia del juicio, siempre y cuando el acto impugnado continúe produciendo sus efectos, ya que tal situación no impide el análisis de constitucionalidad materia de la controversia, atendiendo a las facultades que, en términos del artículo 45 de la ley citada, se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar los efectos de las nulidades que resulten en el juicio, los que válidamente pueden producirse hacia el futuro.



Controversia constitucional 109/2004. Presidente de la República. 17 de mayo de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Mara Gómez Pérez, Lourdes Margarita García Galicia, Marco Antonio Cepeda Anaya y María Dolores Omaña Ramírez.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de junio en curso, aprobó, con el número 78/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de junio de dos mil cinco."

Señalado lo anterior, en términos de la fracción VI del artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta oportuno manifestar los siguientes:

4.- HECHOS. Relacionados con el apartado denominado "3. Normas Generales y Actos cuya Invalidez se Demanda", del presente escrito.

Primero.- Mediante la Ley número 254 publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 52, sección tercera, de fecha día 26 de diciembre de 1996, se erige como municipio libre a la Comisaría de San Ignacio Río Muerto.

SIN TEXTO




PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRANSICIÓN DE TRÁFICO
CONSTITUCIONAL
INCONSTITUCIONAL

El municipio de San Ignacio Río Muerto se localiza al sur del Estado de Sonora, colinda al norte con el municipio de Guaymas y con el municipio de BÁCUM, al sur con el Golfo de California, al este con el municipio de BÁCUM y al oeste con el Golfo de California o Mar de Cortés, (por lo que previamente su territorio pertenecía al municipio de Guaymas) formando parte de la cuenca hidrológica del Río Yaqui, ubicándose en la parte baja de la misma y dentro del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui.

La cabecera municipal cuenta con un sistema de agua potable que se suministra de un canal de distribución de riego del Valle del Yaqui a una planta potabilizadora con capacidad de 45 litros por segundo, teniéndose además un pozo que suministra agua al poblado con capacidad de 40 litros por segundo.

En San Ignacio Río Muerto se tienen tomas suficientes para una cobertura del 100 por ciento y en Bahía Lobos se tienen tomas para una cobertura del 98 por ciento. El resto de las comunidades está sujeto al volumen de agua del canal.



Esto en virtud de los títulos de asignación números 02SON120645/09HCDA10 y 02SON120650/09HMDA10, amparando el primero derechos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales superficiales por un volumen de 589,863.00 metros cúbicos anuales y amparando el segundo derechos para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 589,863.00 metros cúbicos anuales, debidamente inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua, en el Libro de Registro del Estado de Sonora, tipo de folio 1, tomo H-R02, foja número 42, del día 5 de enero de 2000, con el número de registro 02SON113456, el primero de los títulos mencionados y en el Libro de Registro del Estado de Sonora, tipo de folio 1, tomo H-R02, foja número 42, del día 5 de enero de 2000, con el número de registro 02SON113460, el segundo de los títulos referidos.

Segundo.- A partir del 4 de noviembre de 1986, México ratificó la *"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas N° 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de mayo de 1987"*.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUST
SECRETARÍA GENEP
CIÓN DE TRAMITES E
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIO

Una de las principales obligaciones que adquieren las partes contratantes en términos del artículo 3.1 del mismo es elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca el uso racional de los humedales de su territorio.

Implica además la aceptación de los principios que la Convención representa y adhesión a ellos, facilitando la elaboración en el plano nacional de políticas y acciones, incluso legislación, que ayuden a utilizar lo mejor posible sus recursos de humedales en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Tercero.- El 2 de febrero de 2008 nuestro país incorporo al Complejo Lagunar Bahía Guásimas – Estero Lobos, como sitio RAMSAR bajo la tutela de la citada convención.

Dicho humedal tiene una superficie de 135 197.52 hectáreas y se ubica en la costa Noroeste del Pacífico Mexicano, en el estado de Sonora, comprendiendo parte de los municipios de San Ignacio Río Muerto, Guaymas y Empalme.

Se encuentra a 26.55 kilómetros al oeste de Ciudad Obregón y a 23 kilómetros al este de Guaymas, Sonora. Tiene su punto central en los $27^{\circ}32'32.559''\text{N}$ y $110^{\circ}29'21.264''\text{W}$, con coordenadas del extremo sur-occidental de $27^{\circ}11'2.131''\text{N}$ - $110^{\circ}40'31.384''\text{W}$ y de $27^{\circ}55'17.173''\text{N}$ - $110^{\circ}17'50.405''\text{W}$ en el extremo nororiental del sitio.

De acuerdo con la ficha técnica del sitio RAMSAR, consultable en la página oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Complejo Lagunar Bahía Guásimas – Estero Lobos, es un ecosistema de humedales complejo, con multitud de lagunas que se distribuyen a lo largo de la costa, las cuales se enlistan a continuación:

- ☐ Estero Tosalcahui
- ☐ Estero el mezquite
- ☐ Estero el Colorado
- ☐ Estero el Bosque
- ☐ Estero Lobitos
- ☐ Estero Lobos
- ☐ Estero la Culebra
- ☐ Estero del Mapache
- ☐ Estero la Piedrita
- ☐ Estero el Escondido
- ☐ Estero las Arenitas
- ☐ Estero Guaycan

SIN TEXTO



- ☐ Estero la Pitahayita
- ☐ Estero San Francisquito
- ☐ Estero la Luna
- ☐ Estero Bairo
- ☐ Estero el Siuti
- ☐ Estero Camapochi
- ☐ Estero Santo Domingo
- ☐ Estero los Algodones
- ☐ Estero los Tecolotes
- ☐ Estero las Cruces
- ☐ Estero la Tortuga
- ☐ Estero Río Muerto
- ☐ Estero Mapolo
- ☐ Estero Bachoco

Estas lagunas costeras son asociadas con sistemas deltáicos fluviales producidos por sedimentación irregular o subsidencias de superficie que se origina por la compactación de los efectos de carga, además de depresiones formadas por procesos no marinos durante el descenso del nivel del mar.

El área se encuentra dominada por vegetación emergente de bajo litoral y zonas de llanura costera inundable, así como áreas de manglar.

Se cataloga como un sitio muy importante de hibernación de aves acuáticas migratorias y playeras.

Albergan al 4% de la población de aves acuáticas migratorias en el invierno y el 9.4% de las aves playeras observadas en la zona costera del norte del Pacífico, de Baja California al sur de Sonora. Es un punto de reproducción, zona estacional de alimentación, y corredor migratorio de aves. Es área de reproducción, crianza, alimentación y refugio de invertebrados y peces; en la zona se encuentra una población de lobo marino (*Zalophus californianus californianus*), especie bajo protección especial.

Se encuentran reportadas las siguientes especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, que posteriormente fue sustituida por la NOM-059-SEMARNAT-2010:

Aves: garceta roja (*Egretta rufescens*); rascón picudo (*Rallus longirostris*); rascón limícola (*Rallus limicola*), charrán elegante (*Sterna elegans*); charrán

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

mínimo (*Sterna antillarum*); grulla gris (*Grus canadensis*); gaviota ploma (*Larus heermanni*), todas ellas sujetas a protección especial; y ganso de collar (*Branta bernicla*), considerada amenazada.

Mamíferos: delfín nariz de botella (*Tursiops truncatus*); calderón de aletas cortas (*Globicephala macrorhynchus*); delfín común de rostro corto (*Delphinus delphis*); lobo marino californiano (*Zalophus californianus californianus*); rata cambalachera sonoreña (*Neotoma phenax*); murciélago-miotis-pescador (*Myotis vivesi*), todas ellas sujetas a protección especial, y el murciélago hocicudo de Curazao (*Leptonycteris curasoae*), considerada como amenazada.

También se encuentran en el sitio manglares, los cuales son objeto de regulación por parte del gobierno federal, mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, la cual regula el aprovechamiento sustentable de los manglares para prevenir su deterioro, fomentando su conservación y en su caso su restauración. Aquí se observan: mangle negro (*Avicennia germinans*), mangle blanco (*Laguncularia racemosa*) y mangle rojo (*Rhizophora mangle*); las tres especies se encuentran bajo protección especial en la NOM-059-ECOL-2001.

La conservación de este humedal resulta ser primordial para lograr el desarrollo sustentable del Municipio de San Ignacio Río Muerto, ya que de conformidad con la Ficha Informativa de Humedales Ramsar relativo al Complejo Lagunar Bahía Guásimas - Estero Lobos, publicada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En el mismo Se observan zonas de manglar a lo largo de toda la costa, principalmente en estero Lobos, estero San Francisquito, estero La Luna, esteros Campochi, Santo Domingo y Algodones, así como los esteros Las Cruces, La Tortuga, Río Muerto, El Ciego y Laguna Guásimas. Estos manglares son zonas de reproducción, desarrollo y alimentación de multitud de especies de peces, invertebrados y aves así como sitio de invernación de aves migratorias.

La bahía y estero sirven como áreas de reproducción, crianza y desarrollo del camarón azul (*Penaeus stylirostris*), ostiones (principalmente *Crassostrea virginica* y *C. corteziensis*), de las jaibas *Callinectes arcuatus* y *Callinectes bellicosus*, así como de lisa (*Mugil cephalus*) y las mojaras *Eugerres axilaris*, y *Eucinostomus entomelas*, especies de importancia económica en la zona

Dentro de la zona se encuentra parte del territorio de la nación Yaqui Yoreme y gran parte del humedal pertenece a la zona pesquera de este grupo étnico. La flota pesquera de San Ignacio Río Muerto, municipio en donde se

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEN
REGISTRACIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

encuentra el Estero Lobos, está conformada por 8 cooperativas y 432 socios, con 200 embarcaciones menores, con igual número de motores fuera de borda, equipadas con las artes de pesca necesarias para la captura ribereña y de bahía.

Las principales localidades pesqueras son Bahía de Lobos y los Médanos. Siendo que por resolución presidencial publicada en el D.O.F. del 18 de diciembre de 1973, se otorga la concesión de exclusividad al pueblo yaqui pesquero en las aguas de los litorales del Golfo de California, sobre una extensión aproximada de 45 km (superficie estimada de 30 000 hectáreas de terrenos costeros), que abarca la franja que va desde la Bahía de las Guásimas hasta la de Lobos, donde se encuentran los esteros de Yasicuri, Las Tortugas, Tecolote, Las Cruces, Algodones, El Camapochi, Siuti, Las Palomas, La Luna, San Francisco, La Culebra y Bahía Las Piedras.

En esta laguna los Yaquis dependen de la pesca artesanal, explotando diversos invertebrados y peces, pero el principal recurso es el camarón y la jaiba.

La relevancia de los territorios pertenecientes a grupos indígenas se basa en que son aéreas de concentración de biodiversidad, endemismo y productividad biológica, además que estos territorios se encuentran en un buen estado ambiental pero sobretodo, son reservorios de conocimientos tradicionales endémicos, en el uso y manejo de los recursos naturales, así como de una ética de la sustentabilidad fundada en su cultura.

Siendo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora las acciones del sector público, social o privado que impacten los recursos naturales sobre los cuales los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho preferente para acceder de manera autónoma a su uso y disfrute, deberán ser previamente consensuadas con ellos.

Cuarto.- El artículo 115, fracción V, inciso g), de la Constitución General de la República les da a los Municipios competencia para participar en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico.

En el caso, que nos ocupa mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora de 20 de agosto de 2009 se publicó el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora, la cual comprende de

SIN TEXTO



SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA FE
SUPLENTE DE LA SUPLENTE DE JUSTICIA D
SECRETARÍA GENERAL DE
SECCIÓN DE TRÁMITES DE CO
CONSTITUCIONALES Y DE AC
INCONSTITUCIONALES

conformidad con el artículo 2 de la misma las veintisiete unidades de gestión ambiental costeras ubicadas a lo largo del litoral del Estado, teniendo como límite al norte el Río Colorado y al sur el Estado de Sinaloa, definida como la superficie terrestre comprendida en una franja de 15 kilómetros paralela a la línea de costa que cubre la máxima influencia de la zona marina sobre la zona terrestre provocada por la amplitud de mareas, comprendiendo por ello al Municipio de San Ignacio Río Muerto.

Por su parte, el artículo 5 del citado programa establece que la ejecución del mismo se llevara a cabo en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal cuyas atribuciones se relacionen con el mismo y con los ayuntamientos de los municipios ubicados dentro de la franja costera establecida.

Los objetivos del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora, son dar certidumbre a la inversión, proteger el patrimonio natural, lograr el equilibrio entre las actividades productivas y la protección a la naturaleza e inducir las actividades productivas hacia las zonas de mayor aptitud natural y menor impacto ambiental, así como disminuir los conflictos ambientales y sociales.

La zona litoral del Estado de Sonora es un área con un alto potencial de desarrollo económico. Este potencial económico está basado en los recursos naturales marinos y costeros del Golfo de California, que es reconocido por varias autoridades a nivel mundial como una ecorregión prioritaria global por su biodiversidad, tanto marina como terrestre.

En este sentido, el Ordenamiento Ecológico es la herramienta fundamental para planear el desarrollo sustentable de la región costera de Sonora.

Quinto.- El Estado de Sonora cuenta con 12 cuencas hidrológicas las cuales han sido determinadas de conformidad con el artículo 3 fracción XVI de la Ley de Aguas Nacionales, que las define como la unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parte aguas o divisoria de las aguas -aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad-, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SECRETARÍA GENER
CIÓN DE TRAMITES D
CONSTITUCIONALES Y I
INCONSTITUCIO

La cuenca del Río Yaqui comprende 71,452 km² y aunque la mayor superficie se ubica dentro del estado de Sonora, una parte se encuentra en el estado de Chihuahua y en los estados de Arizona y Nuevo México, Estados Unidos de America. A lo largo del cauce del río Yaqui, se han construido en diversas épocas tres presas almacenadoras que se proveen del caudal del mismo, siendo éstas las siguientes:

- a) Lázaro Cárdenas "La Angostura";
- b) Plutarco Elías Calles "El Novillo" y;
- c) Álvaro Obregón "El Oviáchic".

En el caso que nos ocupa los actos cuya invalidez se demanda tienen por objeto sustraer aguas del Río Yaqui a partir de la presa Plutarco Elías Calles, "El Novillo", para trasvasarlas mediante un acueducto denominado "independencia" a la cuenca del Río Sonora en la ciudad de Hermosillo, Sonora, lo cual afecta la disponibilidad del recurso para las poblaciones de la parte baja de la cuenca, los servicios públicos que esta obligado a prestar el ayuntamiento que representamos a la población del municipio, dentro de la cual se encuentran comunidades indígenas, el equilibrio hídrico de la cuenca del Río Yaqui, el medio ambiente del Municipio y de la zona de humedales del mismo, así como a las actividades económicas que en el mismo se realiza como lo es la producción agrícola ya que la mayor parte del territorio del municipio se encuentra dentro del área irrigable del Distrito de Riego 041 Río Yaqui y pesquera.

Sexto.- La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) inició en mayo de 1998 el Programa de Regiones Hidrológicas Prioritarias, con el objetivo de obtener un diagnóstico de las principales subcuencas y sistemas acuáticos del país considerando las características de biodiversidad y los patrones sociales y económicos de las áreas identificadas, para establecer un marco de referencia que pueda ser considerado por los diferentes sectores para el desarrollo de planes de investigación, conservación uso y manejo sostenido.

En relación con la problemática identificada, sobresale la sobreexplotación de los acuíferos superficiales y subterráneos lo que ocasiona una notable disminución en la cantidad de agua disponible, intrusión salina,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TRÁMITES DE
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCION

desertificación y deterioro de los sistemas acuáticos, cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería, silvicultura y crecimiento urbano e industrial mediante actividades que modifican el entorno como desforestación, alteración de cuencas y construcción de presas, desecación o relleno de áreas inundables, modificación de la vegetación natural, pérdida de suelo, obras de ingeniería, contaminación e incendios.

Dentro de la cuenca hidrológica del Río Yaqui se identifica la Región Hidrológica Prioritaria "16. RÍO YAQUI - CASCADA BASASEACHIC." Ubicada en los estados de Sonora y Chihuahua, con una extensión de 54 716.52 km². Siendo sus principales recursos hídricos:

a) Lénticos: presas Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y La Angostura, pantanos dulceacuícolas, estuarios, charcas temporales, llanuras de inundación, brazos de ríos abandonados, lagos

b) Lóticos: ríos Yaqui, Cocoraque, Bavispe, Moctezuma, Chico, Tecoripa, Papigochic, Sahuaripa, arroyos, manantiales termales.

Respecto de la conservación de dicha región hidrológica prioritaria la misma **CONABIO** ha establecido que es preocupante la contaminación, el sobrepastoreo, **la alteración del patrón hidrológico**, la alteración de la calidad del agua en la planicie costera, la intrusión salina, la erosión de la cuenca, asolvamiento de las costas y la erosión en la costa por presas y que **se requiere del derecho de uso de cuotas de agua para los sistemas limnológicos, la recarga de acuíferos** y un equilibrio en el aporte de sedimentos provenientes de las tierras agrícolas a los humedales.

Séptimo.- Al Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto las autoridades demandadas no le dieron intervención alguna en los actos cuya invalidez se demanda, pese a que el municipio por este representado se encuentra ubicado aguas abajo del punto proyectado para derivar las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, siendo que debió de dársele intervención a quienes pueden verse afectados con dichas obras, lo que no se hizo y de donde deriva la invalidez de los mismos.

El Ayuntamiento que represento tuvo conocimiento mediante escritos que le fueron presentados por varios ejidos de la región el 3 de septiembre de 2012 de los actos cuya invalidez se demanda, los cuales no habían sido previamente

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA DE
CIÓN DE TRABAJO
CONSTITUCIÓN
INCONSTITUCIONAL

notificados a este Ayuntamiento por las autoridades correspondientes, por lo que es a partir de ese momento que se tiene conocimiento de éstos, de donde deriva que nos reservemos en forma expresa el derecho de ampliar la presente demanda en virtud de no conocer los fundamentos y consideraciones en base a los cuales se emitieron los actos cuya invalidez se demanda, por no haber tenido participación en los procedimientos de donde derivaron. Siendo aplicable la siguiente tesis:

"Novena Época

Registro: 197522

Instancia: Segunda Sala

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

VI, Octubre de 1997

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. CXXVI/97

Página: 555

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PROCEDE TANTO CON MOTIVO DE UN HECHO NUEVO COMO DE UN HECHO SUPERVENIENTE.



LA FEDERACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA

Del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se desprende que en el procedimiento establecido para la sustanciación de las controversias constitucionales, la ampliación de la demanda opera cuando se actualiza cualquiera de las dos hipótesis siguientes: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción, si apareciere un hecho superveniente. Esas diferentes hipótesis requisitan la oportunidad en que debe hacerse valer la ampliación con base en la distinción entre un hecho nuevo y un hecho superveniente, que no significan lo mismo para la ley en consulta; así, para que se actualice el supuesto de hecho nuevo, no importa el momento en que nace, que puede ser anterior o posterior a la presentación de la demanda, sino la época de conocimiento de su existencia por la parte actora, en especial, que ese conocimiento resulte o derive de la contestación de la demanda, ya que el citado precepto legal dice "... al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo ...". En cambio, tratándose del hecho superveniente, la época de su nacimiento es de capital importancia, ya que la connotación del concepto superveniente, ilustra con relación a que un hecho es de esa naturaleza cuando sobreviene o acontece con posterioridad a cierto momento, según lo previene la ley, después de que se presentó la demanda y hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción; además, una característica propia del hecho superveniente es la de que sea susceptible de cambiar el estado jurídico en el que se encontraba la situación al presentarse la demanda o al entablarse la litis.

Recurso de reclamación en la controversia constitucional 12/97. Congreso del Estado de Chihuahua en contra del Gobernador Constitucional de la misma entidad federativa. 26 de septiembre de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador

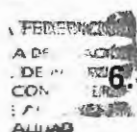
SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN DE TRÁMITES CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván."

5.- INTERES LEGÍTIMO. El Municipio de San Ignacio Río Muerto tiene el interés necesario para controvertir el proyecto Sonora SI, los procedimientos de asignación, evaluación de impacto ambiental y licitación, pues si bien no se trata de proyectos que pretendan realizarse en su circunscripción territorial, se trata de obras que se llevarán a cabo en municipios pertenecientes a una región regida por un programa de ordenamiento ecológico, en cuya aplicación la Constitución le garantiza una intervención a la parte actora y son susceptibles de afectar el medio ambiente en la circunscripción territorial del actor —caso en el cual la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé una posibilidad de intervención—, en tanto emplearán recursos hídricos de una cuenca hidrológica a la que el actor pertenece y respecto de la cual cuenta con títulos de asignación, además de que dichos actos producen una afectación a su esfera de competencia prevista por el artículo 115 de la Constitución Federal en materia de prestación del servicio de agua potable de la población asentada en su territorio dentro del cual se encuentran comunidades indígenas, sin que hubiera sido notificado de dichos actos, ni se le diera intervención alguna, previo a su aprobación.



6. CONCEPTOS DE INVALIDEZ.

PRIMERO.- Se ha violado el derecho al medio ambiente sano previsto en el artículo 4, en relación con el artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto ya que los actos reclamados que sustentan la construcción del Acueducto Independencia no cumplen con las obligaciones de respeto y garantía, establecidas en el artículo 1 constitucional y en los diversos tratados internacionales ratificados por México, toda vez que los actos reclamados no consideran la disminución constante y periódica del cauce del Río Yaqui y los impactos ambientales que el Acueducto causará al trasvasar el agua desde la cuenca del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora. Asimismo, los actos reclamados no respetan la obligación de adoptar medidas progresivas para el goce del derecho al medio ambiente, contenida en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Para determinar el alcance de ese

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMACÍA DE JUS
SUBSECRETARÍA GEN
SECCIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

derecho es primordial hacer referencia al *corpus iuris* internacional existente en materia ambiental y de derechos humanos, que incluye diversos tratados internacionales ratificados y declaraciones internacionales firmadas por México. Así mismo, es importante mencionar que el artículo 1 constitucional señala que cualquier interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, como es el caso del artículo 4 constitucional, debe ser interpretada según el principio *pro homine* y de conformidad con los tratados internacionales en materia.

Ahora bien, según el artículo 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos "tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial". El Estado Mexicano reconoció la competencia de la Corte Interamericana el pasado 6 de diciembre de 1998.

Así mismo, resulta fundamental puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado en la resolución del expediente Varios 912/2010 del 14 de julio de 2011, que "los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos."

Por lo anteriormente escrito, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser orientadores de las decisiones que ésta ilustre autoridad tomará en relación a los agravios planteados.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SECRETARÍA
NACIONAL DE TRABAJO
CONSTITUCION
INCONSTITUCION

Por otra parte, la SCJN ha señalado que el derecho al medio ambiente "vincula y obliga al Estado a dictar normas que tiendan a proteger el medioambiente, entendido éste como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados, procurando que esté libre de contaminación, a fin de asegurar el equilibrio ecológico" (10a. Época; 2a. Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo, Página 3816).

En otras palabras, para cumplir con la obligación de respetar y garantizar el derecho al medio ambiente, el Estado tiene el deber de dictar normas y adoptar medidas que protegen el medio ambiente procurando que esté libre de contaminación, a fin de asegurar el equilibrio ecológico. Por lo tanto, cuando el Estado no adopta medidas y normas para la protección del ambiente violenta el artículo 4 constitucional.

Asimismo, es obligación de cualquier autoridad pública respetar las disposiciones normativas vigentes para la protección del ambiente, por lo que resulta indudable que al no respetar estas disposiciones, se está causando un perjuicio al derecho al medio ambiente establecido en el artículo 4 constitucional.

Los actos reclamados sustentan y fundamentan la construcción del Acueducto Independencia, el cual sustraerá millones de metros cúbicos de agua desde la Presa El Novillo hacia la Ciudad de Hermosillo, en franca contradicción con las leyes ambientales promulgadas por el Estado Mexicano con el objetivo de proteger al ambiente. En particular, se debe señalar que todo el Río Yaqui es objeto de la declaratoria de veda de fecha 27 de julio de 1931, y al estar ésta vigente, obliga tanto a los particulares como a las propias autoridades en su actuación, en tanto no sea derogada o abrogada. La declaratoria en comento establece:

"ACUERDO.

1.- De conformidad con el citado artículo 21 de la Ley de Aguas vigente, se refrenda y se declara en vigor, sin solución de continuidad, el Decreto de 8 de octubre de 1927, que establece la veda de concesiones de aguas sobre el río Yaqui."

Las declaratorias de vedas están fundamentadas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) la cual define en su artículo 1º que tiene como objeto "regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITU

como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable."

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la LAN, las zonas de veda son áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

Por otro lado, el artículo 39 bis de la misma Ley, establece la finalidad de los decretos de veda, al señalar:

"ARTÍCULO 39 BIS. El Ejecutivo Federal podrá expedir Decretos para el establecimiento de Zonas de Veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en casos de sobreexplotación de las aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, sequía o de escasez extrema o situaciones de emergencia o de urgencia, motivadas por contaminación de las aguas o por situaciones derivadas de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, cuando:

I. No sea posible mantener o incrementar las extracciones de agua superficial o del subsuelo, a partir de un determinado volumen anual fijado por "la Autoridad del Agua", sin afectar la sustentabilidad del recurso y sin el riesgo de inducir efectos perjudiciales, económicos o ambientales, en las fuentes de agua de la zona en cuestión o en los usuarios del recurso, o

II. Se requiera prohibir o limitar los usos del agua con objeto de proteger su calidad en las cuencas o acuíferos."

Por otra parte, el artículo 40 fracción II de la Ley de Aguas Nacionales establece que solamente mediante decreto puede modificarse o suprimirse la veda, siendo que en el caso que no existe decreto alguno que establezca el levantamiento de la misma, lo que por sí sólo implica una falta de fundamentación y motivación del acto de autoridad y una violación a la LAN, para lo cual me permito transcribir el citado artículo.

(Énfasis añadido).

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE JL
SUBSECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

"ARTÍCULO 40. Los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda contendrán la ubicación y delimitación de la misma, así como sus consecuencias o modalidades.

El decreto de veda correspondiente deberá señalar:

- I. La declaratoria de utilidad pública;*
- II. Las características de la veda, de su modificación o de su supresión;*
- III. Las consecuencias previstas al instrumentar la veda;*
- IV. La ubicación y delimitación de la zona de veda;*
- V. La descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados;*
- VI. El diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, el volumen disponible de agua y su distribución territorial, así como los volúmenes de extracción, recarga y de escurrimiento;*
- VII. Las bases y disposiciones que deberá adoptar "la Autoridad del Agua", relativas a la forma, condiciones y, en su caso, limitaciones, en relación con las extracciones o descargas en forma temporal o definitiva;*
- VIII. La expedición de normas que regulen los aprovechamientos y descargas, en relación con la fracción anterior, incluyendo el levantamiento y actualización de padrones;*
- IX. Los volúmenes de extracción a que se refieren las dos fracciones anteriores, y*
- X. La temporalidad en que estará vigente la veda, reserva de agua o zona reglamentada, la cual puede prorrogarse de subsistir los supuestos de los Artículos 38 y 39 de la presente Ley.*

El Organismo de Cuenca que corresponda, promoverá la organización de los usuarios de la zona de veda respectiva, para que participen en su instrumentación."

En tales términos es evidente que la vigencia del Decreto de Veda sobre el Río Yaqui es debido a que se actualiza una o unas de las situaciones señaladas en el artículo 39 bis, esto es, casos de sobreexplotación, sequía o de escasez extrema o situaciones de emergencia o de urgencia, en los cuales no sea posible mantener o incrementar las extracciones de agua superficial o del subsuelo sin afectar la sustentabilidad del recurso y sin el riesgo de inducir efectos perjudiciales o se requiera prohibir o limitar los usos del agua con objeto de proteger su calidad en las cuencas o acuíferos.

De conformidad con lo antes señalado, el Río Yaqui, tiene un decreto cuyo objeto es conservar su equilibrio ecológico y la sostenibilidad de la cuenca, por lo

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SECRETARÍA GEN.
CIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES...
INCONSTITUC

que no puede ser objeto de otros aprovechamientos acuíferos, por lo que se resalta que los actos reclamados y los cuales sustentan el proyecto del Acueducto Independencia, son contrarios a las obligaciones de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, puesto que en vez de favorecer y mejorar la sostenibilidad hidrológica del medio ambiente de la cuenca y por ende del Municipio, se pretende aprovechar el agua del Río Yaqui mediante el trasvase del líquido vital, a la altura de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo", a la ciudad de Hermosillo, Sonora, ubicada en el cuenca hidrológica del Río Sonora. Ese trasvase necesariamente incide en el volumen de agua disponible para los usuarios ubicados en la parte baja de la cuenca del Río Yaqui, así como la recarga de los mantos freáticos, afectando el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la cuenca y violentando el Decreto de Veda así como la legislación en la materia.

Así mismo, el proyecto del Acueducto Independencia causará una severa afectación al sitio RAMSAR, con lo que se afectará el derecho a un medio ambiente sano del Municipio y de los habitantes de la Cuenca del Río Yaqui, máxime que las autoridades ambientales en ningún momento realizaron alguna evaluación de los posibles efectos a dicho ecosistema, con lo que se incumplió con el mandato que establece la legislación.

Por otro lado, si bien es posible que el Estado adopte medidas que restrinjan el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución, como pudiera ser considerada el proyecto del Acueducto Independencia para el goce y disfrute del derecho al medio ambiente de los habitantes de la cuenca. Sin embargo, dicha facultad de restringir el goce de un derecho humano no es discrecional sino que se encuentra limitada por los estándares internacionales de derechos humanos. A ese respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en su jurisprudencia los requisitos que deben respetar las restricciones a los derechos humanos para ser consideradas legítimas, determinando que:

"en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder publico... En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás [o] la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática,

SIN TEXID



PODER JUDICIAL DE L
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SUBSECRETARÍA GENER
CIÓN DE TRÁMITES D
CONSTITUCIONALES Y I
INCONSTITUCIO

lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho.¹

Por lo tanto, los actos señalados como reclamados, restringen el goce y disfrute del derecho al medio ambiente de los habitantes del Municipio, y al no haberlos considerado, siendo que a la luz de dicho análisis, estos son derechos legítimos, se violenta la legislación nacional.

Los actos reclamados pretenden ocasionar el trasvase de agua del Río Yaqui hacia la cuenca del Río Sonora; la única referencia que en la Ley de Aguas Nacionales se hace en relación con los trasvases de agua de una cuenca a la otra es en el artículo 14 bis 5 donde se establece que:

"ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

Los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas, deben ser regulados por el Estado;"

Sin embargo, en ninguna otra parte de la Ley de Agua Nacionales, ni en su Reglamento, así como en las Normas Oficiales Mexicanas expeditas por la Comisión Nacional de Agua, se encuentran regulaciones específicas sobre los trasvases entre cuenca, en contradicción con el artículo 14 bis 5, supra reportado. Por lo tanto, aunque esté en las previsiones de los principios hídricos, el trasvase entre cuencas no se encuentra regulado en la normativa mexicana, ni se prevén las modalidades con las cuales se pudiera realizar el trasvase entre cuencas. De esa forma, los actos reclamados imponen una restricción ilegal al derecho al medio ambiente del Municipio San Ignacio Río Muerto.

Si bien es cierto que la autoridad señala que los actos reclamados pretenden satisfacer el derecho al agua de los habitantes de Hermosillo. Por cuanto ese objetivo es legítimo y conforme a los objetivos de la Convención

¹ Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, par. 89, 90, 91

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN DE TRÁMITES
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCIONALES

Americana de Derechos Humanos, la medida propuesta, o sea el proyecto del Acueducto Independencia, no respeta los otros requisitos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no ser una medida proporcional, racional y necesaria, esto es, al no ser una medida que restrinja en menor escala el derecho al medio ambiente.

De hecho, en diversas ocasiones se han propuesto varias medidas para garantizar el acceso al agua de los habitantes de Hermosillo y no afectar el medio ambiente de la cuenca del Río Yaqui.

En particular el pasado 24 de marzo de 2010, durante una mesa técnica en la cual participaron representante de las autoridades reclamadas, se señalaron tres posibles medidas para abastecer de agua la ciudad de Hermosillo:

1. Aprovechar el agua del acuífero denominado La Manga, lo cual se encuentra cerca de la ciudad y presenta volumen de agua disponible.
2. Construir una planta de tratamiento de aguas residuales para poderla reusar en riego agrícola y la de uso agrícola en uso domestico.
3. Construir una planta desalinizadora.

Ninguna de esas medidas han sido tomadas en cuenta por las autoridades aquí señaladas como responsables, las cuales tampoco señalan los fundamentos del por qué escoger el proyecto del Acueducto Independencia es la opción más viable, a pesar de la violación al derecho al medio ambiente que trae aparejada, sin hacer el estudio y análisis de proporcionalidad, eficiencia y viabilidad entre las diferentes medidas, para verificar si era el proyecto que restringía en menor escala el derecho al medio ambiente.

Asimismo, el proyecto del Acueducto Independencia no considera el andamiaje del cauce del Río Yaqui, lo cual, según datos de la Comisión Nacional de Agua, ha ido disminuyendo en los últimos 50 años pasando de una media de 2834.52 MM3 entre 1950 y 1960 a una media de 2651.587 entre 2000 y 2010.

Por lo tanto, la medida elegida por el estado no es racional en base a los objetivos de equilibrio ecológico que marca el artículo 4º constitucional, pues el proyecto del Acueducto Independencia lejos de buscar que la cuenca del Río Yaqui se mantenga en un estado sustentable y en equilibrio, se realizará un aprovechamiento de agua extra a los ya existentes en la cuenca, lo que causará el

SIN TEXTO.



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
SECCIÓN DE TRAM
CONSTITUCIONA
INCONSTIT

efecto grave, al no fomentar el aumento del caudal del Río Yaqui sino la disminución y por lo tanto afectación a toda la población dependiente de éste.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los actos reclamados que sustentan el proyecto de Acueducto Independencia son violatorios del artículo 4º constitucional, pues no se garantiza el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes del Municipio de San Ignacio Río Muerto.

SEGUNDO.- Se actualiza una violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4, 27 y 115 fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río ya que, durante el desarrollo de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental no se le emplazo a los mismos, ni se le otorgó intervención alguna, lo que le afecta de modo especial en virtud de la posición que guarda frente a los actos impugnados.

Esto, en virtud de que los mismos producirán daños ecológicos en su territorio, siendo la materia de medio ambiente concurrente entre la federación, los estados y los municipios.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Así mismo dicho numeral dispone que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. A efecto de garantizar dicho derecho, el artículo 115 en su fracción V, inciso g) establece la competencia de los municipios para participar en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico, así como en los artículos 5, 7 Bis, 12 Bis 4, 14 Bis, 14 Bis 5 y 15 Bis de la Ley de Aguas Nacionales se establecen las facultades de los municipios para participar en la administración del agua, en la política hídrica y en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.

El municipio que representamos se encuentra ubicado geográficamente en la parte baja de la cuenca hidrológica del Río Yaqui. Por lo que cualquier sustracción del recurso en virtud de nuevos títulos de asignación que se hace en

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
REGISTRACIÓN DE HECHOS DE
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCIONALES

la parte alta de la misma, sin que existan condiciones reales de disponibilidad para ello y que no se reincorpore a la cuenca sino que se trasvasa a otra distinta, afectan negativamente el equilibrio hidrológico y ecológico de la misma, y por ende el estado de hecho que respecto del mismo existe, lo que se traduce en el interés legítimo de este para demandar la invalidez de dichos actos.

El Programa Sonora SI elaborado por el ejecutivo del Estado de Sonora, prevé como una de sus acciones la construcción del "Acueducto Independencia" con el objeto de sustraer aguas del Río Yaqui a la altura de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo" para trasvasarlas a la cuenca hidrológica del Río Sonora, en donde se encuentra ubicado el Municipio de Hermosillo, Sonora, para ello se llevo a cabo la licitación para la construcción del citado acueducto.

La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) dependiente de la SEMARNAT, emitió resolución favorable respecto de la evaluación de impacto ambiental de la obra de construcción y operación del citado acueducto, siendo que dichos actos causan una afectación al medio ambiente del Municipio, por lo que se le debió de conceder la garantía de previa audiencia antes de la emisión de los mismos, situación que no se hizo, de donde deriva la invalidez de los mismos.

FEDERACIÓN
DE
DE
ONT
LD

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora, señala en su artículo 2 las veintisiete unidades de gestión ambiental costeras ubicadas a lo largo del litoral del Estado, teniendo como límite al norte el Río Colorado y al sur el Estado de Sinaloa, definida como la superficie terrestre comprendida en una franja de 15 kilómetros paralela a la línea de costa que cubre la máxima influencia de la zona marina sobre la zona terrestre provocada por la amplitud de mareas, comprendiendo por ello al Municipio de San Ignacio Río Muerto.

Por su parte, el artículo 5 del citado programa establece que la ejecución del mismo se llevará a cabo en coordinación con las Dependencias de la Administración Pública Estatal, cuyas atribuciones se relacionen con el mismo, así con los Ayuntamientos de los Municipios ubicados dentro de la franja costera establecida.

Por otra parte es de resaltarse que en dicho programa se establece, entre otras acciones, la restauración de humedales prioritarios, en virtud de que la estructura y la composición de los mismos se ven afectados por la disponibilidad y calidad del agua, siendo los criterios ecológicos utilizados para la aplicación de la

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

política de restauración de humedales la restauración de los volúmenes y la calidad de agua dulce de las corrientes que alimentan a los humedales y detener el deterioro a través de la aplicación de las especificaciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003.

El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa de Sonora, constituye el referente obligado a tomarse en cuenta en el marco de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, en términos del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual prevé que la autorización de las obras y actividades que requieran evaluación de impacto ambiental se sujetará, entre otros instrumentos, a los programas de ordenamiento ecológico del territorio; es decir, los procedimientos de evaluación del impacto ambiental son instancias de aplicación de los respectivos programas.

Por tanto, si la Constitución prevé la participación de los Municipios en la aplicación de los programas de ordenamiento ecológico y si los procedimientos de evaluación de impacto ambiental constituyen ámbitos en los que dichos programas son aplicables, es dable que el Municipio reclame para sí una participación en los mismos, máxime cuando las actividades autorizadas afectan la calidad de vida y del medio ambiente de sus habitantes.

No debe perderse de vista que la materia ambiental es constitucionalmente concurrente, por lo que en ella participan los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal en los términos de la ley marco respectiva, que en el caso es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual prevé entre las facultades municipales en materia ambiental, la contenida en su artículo 8°, fracción X, que dice:

"Artículo 8°.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

...

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial."

El precepto anterior establece como competencia a cargo de los Municipios el participar en la atención de los asuntos que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial, los cuales se producen en el caso que nos ocupa.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA G
CIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN
SECRETARÍA

Resultan aplicables al presente caso las consideraciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 89/2010 promovida por el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Con lo anteriormente señalado claramente se observa la falta de legalidad con la se llevaron a cabo los actos reclamados, al no haber permitido que el Municipio al que represento pudiera ejercer sus facultades y competencias en términos de la legislación, con lo que se actualiza una violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4º, 27 y 115 fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto no pudo participar en el desarrollo de los procedimientos de evaluación del impacto ambiental al no haberse emplazado, además de no que no se le otorgó intervención alguna, lo que le afecta de modo especial en virtud de la posición que guarda frente a los actos impugnados y los efectos de estos.

TERCERO.- La resolución de evaluación del impacto ambiental emitida por la DGIRA y las resoluciones por medio de las cuales la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua conceden los tres títulos de asignación a favor de la CEA, violan los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 1, 4, 27, 115 fracción V, inciso g) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme al artículo 35, párrafo cuarto, fracción III, incisos a) y b), de la LGEEPA, la resolución de impacto ambiental para la realización del proyecto "Acueducto Independencia", debió haber sido en sentido de negar la realización del proyecto, en igual sentido debió de resolverse respecto de las solicitudes de asignación por violar además el artículo 86 bis 1 de la Ley de Aguas Nacionales que establece la obligación de los Organismos de Cuenca de preservar los humedales. Sobre el particular, el artículo 35 establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 35.-...

[...]

[...]

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GE
CIÓN DE TRAMIT
CONSTITUCIONAL
INCONSTIT

I.-[...]

III.- Negar la autorización solicitada, cuando:

- a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;
- b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o.."

El precepto citado, claramente señala que cuando se someta a evaluación de impacto ambiental un proyecto ante la DGIRA y éste contravenga lo establecido en la LGEEPA, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, la resolución que se emita debe ser en sentido negativo.

En el caso en concreto tenemos que la autoridad emitió una resolución contraria a las normas que rigen su actuación por las siguientes razones:

En primer término, porque no se evaluaron los impactos negativos del proyecto sobre el Complejo Lagunar Bahía Guásimas - Estero Lobos y que esta protegido por la *"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas N° 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de mayo de 1987"*. A la cual se adhiere México a partir del 4 de noviembre de 1986, y no se aplicó el principio precautorio que rige en materia ambiental, ya que **debió acreditarse científicamente que no se producirían impactos sobre el mismo con la construcción y operación del Acueducto Independencia como parte integrante de la cuenca hidrológica del Río Yaqui, en la cual se pretende llevar a cabo el citado trasvase, siendo en caso, que en la evaluación de impacto ambiental ni siquiera se prevé dicha afectación o impacto.**

En virtud de dicha convención, el estado mexicano esta obligado a llevar a cabo un *"uso racional"* lo que de acuerdo con la Convención de Ramsar, se ha definido como *"el uso sostenible de los humedales para beneficio de la humanidad de manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema"*.

En el primer Plan Estratégico de la Convención para 1997-2002 se abordó la cuestión del agua y de los humedales y se instó a las Partes Contratantes a integrar la conservación y el uso racional de los humedales en la adopción de

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GE
CIÓN DE TRAMIT
CONSTITUCIONAL
INCONSTIT

decisiones acerca del uso de la tierra, la gestión de las aguas freáticas y la ordenación de las cuencas de captación y cuencas hidrográficas y de las zonas costeras, lo que no se cumple en los actos reclamados, ya que no se tomó en cuenta al momento de expedir los títulos de asignación y evaluar el impacto ambiental a dicho sitio Ramsar, pese a encontrarse el mismo en la cuenca baja del Río Yaqui de donde se extraerán los volúmenes de agua para ser trasvasados a la cuenca del río Sonora.

De acuerdo con el manual emitido por la "Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010. *Asignación y manejo de los recursos hídricos: Lineamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales*. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 4ª edición, vol. 10. Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza)", se desprende que:

a) El impacto en los humedales puede derivar tanto de las actividades humanas realizadas dentro de la zona del humedal o en las llevadas a cabo en la cuenca a la cual pertenecen, por la extracción de agua o alteración de la corriente:

"El impacto en los humedales puede deberse tanto a las actividades humanas que se llevan a cabo en su interior como, por efecto de la interconectividad del ciclo hidrológico, a las actividades que tienen lugar en la cuenca más amplia. La modificación antropogénica del régimen hidrológico, mediante la extracción de agua (incluidas las aguas subterráneas) o la alteración de las corrientes, pueden tener consecuencias perjudiciales para la integridad de los ecosistemas de humedales. El aflujo insuficiente de agua a los humedales, debido a su absorción, almacenamiento y desvío para el abastecimiento a la población, la agricultura, la industria y la producción hidroeléctrica, es una de las causas principales de la pérdida y degradación de los humedales. Un requisito clave para su conservación y uso racional es velar por que se les asigne oportunamente agua de buena calidad en cantidad adecuada."

b) Los servicios que proporcionan los humedales van desde la recarga y regulación de los mantos freáticos, además de mantener a una gran biodiversidad (en sus tres niveles: especies, genético y ecosistemas), brindan protección contra tormentas e inundaciones, estabilizan la línea costera, controlan la erosión,

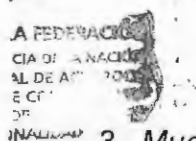
SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARIA GEI
SECCIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCIONAL E
INCONSTRU.

retienen nutrientes y sedimentos, filtran contaminantes y estabilizan las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura, asegurar el abastecimiento de agua (cantidad y calidad); mantienen los recursos pesqueros, ayuda en la agricultura manteniendo las capas freáticas y reteniendo nutrientes en las llanuras aluviales posibilidades de recreación y turismo, lo que ha sido expuesto además por la CONABIO.

"En 1996, en la 6ª reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes (COP6), la Convención determinó oficialmente la necesidad de integrar los humedales en la ordenación de las cuencas hidrográficas, mediante la Resolución VI.23, titulada Ramsar y el agua, en la que se reconocían "las importantes funciones hidrológicas de los humedales, incluyendo la recarga de acuíferos, la mejora de la calidad del agua y la amortiguación de las inundaciones, así como el inextricable vínculo que existe entre los recursos hídricos y los humedales". La dicha Resolución subrayaba además "la necesidad planificar a nivel de las cuencas de captación o cuencas hidrográficas, lo que implica integrar la gestión de los recursos hídricos y la conservación de los humedales".



3. Muchos organismos y entidades encargados de las cuencas fluviales y los recursos de agua no valoran suficientemente los beneficios y el valor socioeconómico que proporcionan los humedales tanto por su productividad, por ejemplo la pesca y el pastoreo de ganado, como por su importancia social.

4. Por lo general no se tiene suficiente conciencia de la gran variedad de servicios que pueden proporcionar los humedales, entre los que se incluye la reducción de las inundaciones, la regulación de recursos y la mejora de la calidad del agua, ni de que pueden ser un activo muy importante para los encargados del manejo de los recursos hídricos. **En consecuencia, los humedales no suelen recibir la atención que merecen en las decisiones sobre asignación de recursos hídricos."**

"las funciones ecológicas que desempeñan, como son la recarga y regulación de los mantos freáticos, además de mantener a una gran

SIN TEXTO



PODER JUDICI
SUPREMA CORTI
SECRETA
CIÓN DE TI
STITUCI
NCOI

biodiversidad (en sus tres niveles: especies, genético y ecosistemas), brindan protección contra tormentas e inundaciones, estabilizan la línea costera, controlan la erosión, retienen nutrientes y sedimentos, filtran contaminantes y estabilizan las condiciones climáticas locales, particularmente lluvia y temperatura. Los humedales reportan a menudo beneficios económicos enormes, como el asegurar el abastecimiento de agua (cantidad y calidad); mantienen los recursos pesqueros (más de dos tercios de las capturas mundiales de peces están vinculadas a la salud de las zonas de humedales); ayuda en la agricultura manteniendo las capas freáticas y reteniendo nutrientes en las llanuras aluviales; proveen madera y otros materiales de construcción, así como recursos energéticos (como materia vegetal); otros productos de humedales, incluidas hierbas medicinales; posibilidades de recreación y turismo." (CONABIO).

c) En toda decisión sobre la asignación de recursos hídricos es necesario cuantificar las necesidades de agua de los humedales.

"5. En toda decisión sobre la asignación de recursos hídricos es necesario cuantificar las necesidades de agua que es imprescindible satisfacer para que las características ecológicas de los humedales no resulten alteradas de manera inaceptable."

d) A efecto de poder llevar un manejo integrado de los recursos hídricos es necesario aplicar determinados principios, los cuales en el presente caso no se respetaron, ni en las asignaciones de aguas nacionales, ni en la resolución de evaluación del impacto ambiental.

La sostenibilidad como meta.

Es preciso proporcionar suficiente agua a los humedales para mantener el funcionamiento de estos ecosistemas respetando su dinámica natural en beneficio de las generaciones futuras. Cuando se desconozcan las necesidades de agua, o cuando no estén claras las repercusiones de la reducción de la asignación de agua a los humedales, deberá aplicarse el criterio de precaución.

Equidad en la participación y en los factores decisorios.

SIN TEXTO



PODER JUDIC
SUPREMA CORT
SECRETAR
N DE TP
CONSTITUCI
FED

En cualquier decisión los aspectos ecológicos y sociales deben recibir la misma atención que las consideraciones económicas.

Ahora bien tenemos que al momento de expedir los títulos de asignación y evaluar el impacto ambiental del proyecto las autoridades responsables no observaron el tratado internacional por lo siguiente:

- 1.- No se evaluaron ni tomaron en cuenta los impactos del proyecto sobre el humedal.
- 2.- No se integró la conservación y el uso racional del humedal en la adopción de las decisiones acerca del uso de las aguas de la cuenca del río.
- 3.- No se valoraron los beneficios y el valor socioeconómico que proporcionan el humedal.
- 4.- No se cuantificaron las necesidades de agua de los humedales.
- 5.- No se aplicó el criterio de precaución respecto de las repercusiones de la reducción de la asignación de agua a los humedales.
- 6.- No se aplicaron los principios que rigen el manejo integrado de los recursos hídricos.

En segundo término, tampoco se observó la norma oficial mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003.

Específicamente en su punto 0.17, obliga a que cualquier actividad productiva deberá considerar a cabalidad los servicios y funciones que los humedales costeros desarrollan, en los estudios de impacto ambiental, con el propósito de dimensionar los efectos negativos de alteraciones cercanas o a distancia por las actividades humanas y naturales, y que no se analizaron al emitir los títulos de asignación y la evaluación del impacto ambiental del proyecto.

Los puntos 0.31, 0.32, 0.39, 0.40, 0.41 3.27 establecen los servicios ecológicos que los humedales prestan a las comunidades cercanas dentro de la cuenca hidrológica como lo es el municipio de San Ignacio Río Muerto.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
ABSECRETARIA G
CIÓN DE TRAM
ONSTITUCION/
INCONSTI

La Norma Oficial Mexicana, es obligatoria para todo usuario en la cuenca hidrológica de conformidad con los puntos 1.0 y 1.3 objeto y campo de aplicación, respecto de cualquier obra que por sus características pueda influir negativamente en el humedal, como lo es el la construcción y operación del Acueducto Independencia, siendo que en el punto **4.1 prohíbe toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica o integridad ecológica de los humedales costeros.**

Por lo anterior, resulta evidente que la DGIRA autorizó la realización de obras ilegales mediante la resolución combatida.

Por lo tanto, todos los actos derivados de la autorización ilegal, son inválidos en virtud de no ceñirse la autoridad en su actuación a las normas que le son aplicables.

El interés legítimo del actor para combatir dichos actos, deriva del hecho de que los humedales costeros contribuyen a recargar acuíferos subterráneos, siendo que dentro de los servicios ambientales que proporcionan se encuentran el proveer sustento alimenticio a numerosas comunidades humanas establecidas en la costa, ya que son hábitat de crianza y desove de poblaciones de especies marinas de interés comercial y de subsistencia, siendo que su degradación repercute de manera significativa sobre el deterioro de la pesca ribereña, siendo fuente de enfriamiento natural para las comunidades cercanas, protegiendo a centros, poblaciones e infraestructura costera de los efectos destructivos del oleaje y viento generado por huracanes y tormentas, así como de inundaciones.

CUARTO.- Se actualiza una violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4, 27 y 115 fracción III inciso a), fracción V, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto ya que, durante el desarrollo de los procedimientos de asignación de aguas nacionales a favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, no se le emplazó a los mismos, ni se le otorgó intervención alguna, lo que le afecta de modo especial en virtud de la posición que guarda frente a los actos impugnados.

Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados afectan o pueden llegar a afectar los derechos derivados del título de asignación que le fue concedido para usar aguas nacionales, las funciones y servicios públicos de su competencia, así

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUST
SUBSECRETARÍA GENE
CIÓN DE TRÁMITES
CONSTITUCIONALES Y
INCONSTITUCI

como los efectos que se producirán, esto es, daños ecológicos en el territorio de Municipio de San Ignacio Río Muerto.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. A efecto de garantizar dicho derecho el artículo 115 en su fracción III inciso a) del ordenamiento legal en cita, impone a los Municipios, la obligación de proporcionar a sus habitantes dentro de su circunscripción territorial los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales

Así mismo la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, establece en su artículo 41 la obligación a cargo de los Municipios de garantizar que las comunidades indígenas dispongan de la infraestructura básica en materia de servicios de agua potable, drenaje sanitario y energía eléctrica. Asimismo, brindará las facilidades necesarias para que las familias tengan acceso a estos servicios en sus viviendas.

Para poder garantizar ese derecho humano de sus habitantes y prestar los citados servicios públicos, el ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto se abastece de las aguas del Río Yaqui a través del título de asignación de aguas nacionales otorgado por la Comisión Nacional del Agua en términos del artículo 27 Constitucional, el cual le concede derechos y acciones respecto de las aguas nacionales que se le han asignado, así como otras en materia ambiental, a fin de preservar ese recurso y evitar su contaminación.

El artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales y reglamentaria del artículo 27 Constitucional establece:

(Énfasis agregado).

"ARTÍCULO 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los gobiernos de los estados en los términos de esta Ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de "la Autoridad del Agua", hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de Ley.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITES DE
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCION

En el reuso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros relativos a los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua."

El municipio que represento se encuentra ubicado geográficamente en la parte baja de la cuenca hidrológica del Río Yaqui, por lo que cualquier sustracción del recurso en virtud de nuevos títulos de asignación que se hace en la parte alta de la misma, sin que existan las condiciones reales de disponibilidad para ello y que no se reincorpore a la cuenca sino que se trasvasa a otra distinta, afectan negativamente el equilibrio hidrológico y ecológico de la misma, la disponibilidad de agua para los usuarios ubicados en la parte baja de la cuenca, (dentro de los cuales se encuentra el Municipio San Ignacio Río Muerto, esto es, se están afectando los recursos con los cuales se prestan los servicios de agua potable a que se encuentra obligado constitucionalmente el Ayuntamiento, y por ende el estado de hecho que respecto del mismo existe, lo que se traduce en el interés legítimo de este para demandar la invalidez de dichos actos.

A pesar de la grave afectación, se permitió el trasvaso por medio del Acueducto Independencia de aguas que fueron otorgadas en asignación por la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (dependiente del ejecutivo federal) a la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora mediante tres títulos, identificados con los números 02SON150083/09HBDA10, 02SON150085/09HBDA10 y 02SON150734/09HBDA11, lo que implica un volumen de 40'182,450.60, 11'720,000.00 y 8'582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del Río Yaqui respectivamente.

Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la garantía de audiencia impone las siguientes obligaciones a las autoridades cuyos actos puedan afectar los intereses de los Municipios:

- 1) Comunicar a los Ayuntamientos correspondientes la existencia de un procedimiento cuya culminación pueda afectar sus intereses;
- 2) Referirles las cuestiones que se tratarán o debatirán en el mismo;
- 3) Darles oportunidad de expresar su opinión al respecto y de presentar pruebas en apoyo de sus afirmaciones; y

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRAN
CONSTITUCION
INCONSTITU

4) Emitir una resolución final en la que se atiendan las cuestiones planteadas por las partes.

Siendo aplicables por analogía las jurisprudencias que enseguida se transcriben:

(Énfasis añadido)

"Novena Época.

Registro: 176521

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Diciembre de 2005

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 152/2005

Página: 2298

MUNICIPIOS. EN EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL DECRETO QUE LOS CREA DEBE CONCEDERSE EL DERECHO DE AUDIENCIA A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS.

Aunque la jurisprudencia en torno a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha desarrollado fundamentalmente respecto a la situación propia de los particulares afectados por actos de autoridades judiciales o administrativas, es claro que aquélla proyecta sus efectos sobre el proceso de creación de un nuevo Municipio, porque en dicho contexto este último se encuentra en una situación jurídica en la que no actúa propiamente como autoridad, dado que sus atribuciones están sometidas y condicionadas a las actuaciones pertinentes de otro poder público. **En consecuencia, la garantía de audiencia impone a las autoridades competentes para tramitar y aprobar la creación de un nuevo Municipio el deber de: 1) comunicar a los Ayuntamientos correspondientes la existencia de un procedimiento cuya culminación pueda afectar sus intereses; 2) referirles las cuestiones que se tratarán o debatirán en el mismo; 3) darles oportunidad de expresar su opinión al respecto y de presentar pruebas en apoyo de sus afirmaciones; y 4) emitir una resolución final en la que se atiendan las cuestiones planteadas por las partes.**

Controversia constitucional 11/2004. Municipio de Martínez de la Torre, Estado de Veracruz. 20 de septiembre de 2005. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

El Tribunal Pleno, el veintidós de noviembre en curso, aprobó, con el número 152/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cinco."

"Novena Época

Registro: 189326

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

XIV, Julio de 2001
 Materia(s): Constitucional
 Tesis: P./J. 85/2001
 Página: 925

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA DEBEN SER ESCUCHADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE SE SIGAN AL RESPECTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL, AUNQUE NO LO PREVEA LA CONSTITUCIÓN LOCAL NI LA CORRESPONDIENTE LEY DE RESPONSABILIDADES.

Aunque los artículos 107, 108, 109 y 111 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, así como los diversos del 8o. al 27 de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de los Servidores Públicos de la referida entidad, no prevén que en los procedimientos de responsabilidad seguidos a los integrantes de un Ayuntamiento se deba dar intervención a éste; tratándose de conductas atribuidas a su presidente municipal relacionadas con su función pública debe dársele la mencionada intervención, en virtud de que la resolución que se dicte en esos procedimientos tendente a sancionar a los munícipes, afecta la integración del Ayuntamiento, aspecto que se encuentra tutelado por los artículos 14 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Controversia constitucional 9/2000. Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala. 18 de junio de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de junio, en curso, aprobó, con el número 85/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil uno."

De lo anterior claramente se observa la violación denunciada, en virtud de que el ejecutivo federal no le notificó ni dió intervención alguna al Municipio de los procedimientos de asignación de aguas nacionales del Río Yaqui a favor de la Comisión Estatal del Agua, con el objeto de ser trasvasadas a la cuenca del Río Sonora, aun cuando se cuenta con un título de asignación sobre aguas del Río Yaqui, además de que las obras afectan el medio ambiente y equilibrio de dicho municipio. así mismo, tampoco comunicó el objeto de los citados procedimientos a efecto de que estuviéramos en condiciones de expresar nuestra opinión al respecto y de presentar pruebas en apoyo de nuestras afirmaciones, cuando dichos actos inciden negativamente sobre la situación de hecho que prevalece a favor del municipio en virtud del título de asignación que para la prestación de los servicios públicos que le competen le fue conferido y de su ubicación geográfica en la parte baja de la cuenca hidrológica del Río Yaqui. Resulta aplicable al presente caso la siguiente tesis:

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
DISTRIBUCIÓN DE TRÁMITES Y
CONSTITUCIONALES Y
RECONSTRUCCIÓN

"Quinta Época
Registro: 317634
Instancia: Segunda Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
CXXI
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 2538

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (DERECHOS ADQUIRIDOS).

El beneficiario de un permiso o concesión administrativa no tiene una simple expectativa de derecho, sino un derecho adquirido, particularmente si, de acuerdo con cláusula expresa de dicho permiso o concesión, resulta evidente que si adquirió los derechos que emanan del permiso aludido.

Amparo administrativo en revisión 2453/54.

de septiembre de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: José Rivera Pérez Campos."

"Quinta Época
Registro: 320169
Instancia: Segunda Sala
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
C
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 1794

AGUAS, APROVECHAMIENTO DE LAS.

La Ley de Aguas de Propiedad Nacional, al fijar categorías o formas de obtener el aprovechamiento de aguas y determinar, simultáneamente, los procedimientos que deben seguirse, ha tratado que aquellos que tienen a su favor derechos adquiridos, reconocidos, sean oídos en las tramitaciones que se susciten. Por tanto, comprobada la falta de audiencia en cualquier expediente de aguas, la modificación a los derechos del afectado, es violatoria de garantías.

Amparo administrativo en revisión 546/49.

29 de junio de 1949. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. Ponente: Octavio Mendoza González."

Lo anterior es así, toda vez que la ejecución del proyecto contemplado en el programa Sonora SI, así como de las resoluciones de asignación de aguas y de evaluación del impacto ambiental de la obra, para la extracción de los volúmenes concesionados a la Comisión Estatal del Agua de la Cuenca del Río Yaqui para trasvasarse a la ciudad de Hermosillo, Sonora, afecta primeramente la disponibilidad del recurso en la primera de las cuencas de la cual se abastece el Ayuntamiento y con ello la prestación de los servicios públicos de agua potable y daños ecológicos en su territorio, esto es, está haciendo imposible que el Municipio cumpla con el mandato constitucional de protección y garantía del derecho humano a un medio ambiente sano y de acceso y disposición de agua.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL C
PODER JUDICIAL DE J
SECRETARÍA GE
COMISIÓN DE TRAMITI
CONSTITUCIONAL F
EXCMA. A. A.

QUINTO.- Violación de los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 1, 27, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Dirección de Administración del Agua no es la autoridad competente para emitir los títulos de asignación números 02SON150083/09HBDA10, 02SON150085/09HBDA10 y 02SON150734/09HBDA11.

De conformidad con el citado dispositivo constitucional, toda autoridad se encuentra obligada a ceñir su actuación al marco legal que le resulta aplicable, sin que pueda actuar en forma arbitraria, ya que al no hacerlo deriva en la invalidez del acto. Así lo ha establecido el Pleno de este H. Tribunal en la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

Registro: 177331

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXII, Septiembre de 2005

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 109/2005

Página: 891



LA FEDERACIÓN
CORTA D-
AL D-
DE C-
DE
CONVENCIONES

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.", justificó un distinto tratamiento de los principios de fundamentación y motivación, tratándose de actuaciones interinstitucionales, lo cual no debe llevarse al extremo de considerar inaplicables dichas exigencias en ese ámbito debido a que la parte dogmática de la Constitución tiene eficacia normativa incluso tratándose de las relaciones entre Poderes del Estado, aunado a que dicho criterio debe armonizarse con el contenido en la diversa jurisprudencia P./J. 98/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; de ahí que tales principios, así como el de irretroactividad de la ley, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo sean concebidos como normas dirigidas a tutelar la esfera jurídica de los gobernados, sino como fundamentos constitucionales de carácter objetivo (seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad, exacta aplicación de la ley) capaces de condicionar la validez de los actos interinstitucionales,

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GENE
CIÓN DE TRAMITES
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUCI

especialmente en los casos en que ello sea relevante a efecto de resolver los problemas competenciales formulados en una controversia constitucional, lo que sucede, por ejemplo: 1) tratándose de actos en los que un poder revisa los de otro; 2) cuando el sistema jurídico prevé distintas modalidades de actuación a cargo de algún poder público (ordinarias y extraordinarias), y/o 3) cuando existe un régimen normativo transitorio que altera los alcances de las atribuciones del órgano respectivo, tomando en cuenta que la violación de dichos principios en tales supuestos podría generar un pronunciamiento de invalidez por incompetencia constitucional, y no sólo para efectos.

Controversia constitucional 91/2003. Poder Ejecutivo Federal. 23 de junio de 2005. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala.

El Tribunal Pleno, el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número 109/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de dos mil cinco.

Nota: Las tesis P./J. 50/2000 y P./J. 98/99 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 813 y Tomo X, septiembre de 1999, página 703, respectivamente."

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 fracciones IX y XX de la Ley de Aguas Nacionales reglamentaria del artículo 27 Constitucional, es la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional quien puede emitir títulos de asignación para el aprovechamiento integral de las aguas nacionales cuando este repercuta en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas.

En el presente caso, la asignación realizada a favor de la Comisión Estatal del Agua, repercute directamente en una zona de humedales que se encuentra protegida por la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. *Compilación de Tratados de las Naciones Unidas* N° 14583. Modificada según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de mayo de 1987", convención a la cual se adhiere México el 4 de noviembre de 1986, además de que la cuenca del Río Yaqui es transfronteriza.

De lo anterior se observa claramente que se actualizan los dos supuestos previstos por la ley, por lo que deviene la incompetencia de la Dirección de Administración del Agua para emitir los títulos de asignación cuya nulidad se demanda, ya que, de acuerdo a la ley, es una facultad exclusiva de la federación en virtud de los supuestos actualizados, por lo que al emitirse dichos títulos de

SIN TEXTO




PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE D
SUBSECRETARÍA C
SECCIÓN DE TRAN
CONSTITUCION
INCONSTIT

asignación por una autoridad que no es la facultada legalmente para ello, de ello deriva la invalidez del acto.

Al limitarse mediante actos ilegales la disposición de aguas en perjuicio de mí representado, de los servicios a los que se encuentra obligado a prestar, del equilibrio hidrológico y ecológico de la cuenca en la que se encuentra ubicado nuestro municipio, surge el interés legítimo de este para solicitar la invalidez de los mismos.

Siendo que la materia de medio ambiente es una competencia concurrente entre la federación, los estados y los municipios en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal, y estando obligados tanto la Federación como los Municipios a preservar las condiciones ecológicas del régimen hidrológico mediante la ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, así como mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales, en términos de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual establece:



ARTÍCULO 85. *En concordancia con las Fracciones VI y VII del Artículo 7 de la presente Ley, es fundamental que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, a través de las instancias correspondientes, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas y acciones necesarias para proteger y conservar la calidad del agua, en los términos de Ley*

Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de los tres órdenes de gobierno, que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán responsables en los términos de Ley de:

- a. Realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación, uso o aprovechamiento posterior, y*
- b. Mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales."*

SEXTO.- Violación de los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua no podía emitir los títulos de asignación 02SON150083/09HBDA10, 02SON150085/09HBDA10 y 02SON150734/09HBDA11 a favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN DE TRÁMITES DE
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, la prestación del servicio público de agua potable corresponde a los Ayuntamientos. Sin embargo y cuando estos se encuentren en imposibilidad material para prestar dicho servicio público, podrán celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal del servicio, o bien se preste o ejerza coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

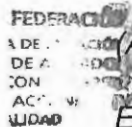
(Énfasis y subrayado agregado).

"Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

I.

...Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.



(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a)...

b)...

c)...

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, **al no existir el convenio correspondiente**, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JU
SUBSECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRÁMITES
CONSTITUCIONALES
INCONSTITUC

(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b).- Alumbrado público.

(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d).- ...

(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio."

Siendo aplicable la siguiente jurisprudencia del Pleno de este Tribunal:

LA FEDERACIÓN
IA O. ...
L DE ...
CC ...
E A ...
JALISCO

Novena Época

Registro: 175761

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Febrero de 2006

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 25/2006

Página: 1538

SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIONES MUNICIPALES. PARA QUE SU PRESTACIÓN O EJERCICIO SEAN TRANSFERIDOS AL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBE EXISTIR SOLICITUD PREVIA DEL AYUNTAMIENTO, APROBADA CUANDO MENOS POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).

A fin de salvaguardar el ámbito competencial del Municipio y hacer posible la transferencia al Estado de la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función pública municipal, el inciso d) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe interpretarse en el sentido de que cuando no exista convenio entre una entidad federativa y sus Municipios, el Ayuntamiento, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá solicitar a la legislatura que el

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL I.
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARÍA DE
FACCIÓN DE TRAMITA
CONSTITUCIÓN
INCONSTITU

Gobierno Estatal asuma la función o servicio público de que se trate, debiendo la legislatura emitir las normas que regulen los términos de la referida asunción, así como el dictamen que califique la imposibilidad del ejercicio de la función o de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento, sin que ello implique que pueda determinar unilateral y oficiosamente tal circunstancia, pues la mencionada solicitud es un derecho exclusivo del Ayuntamiento.

Controversia constitucional 104/2003. Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. 11 de julio de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 25/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis."

Lo anterior se encuentra previsto además en los artículos 79 fracción XVI, 136 y 138 de la Constitución Política del Estado de Sonora, al establecer que los Ayuntamientos por medio de un convenio de coordinación con el Ejecutivo del Estado, pueden establecer que este último lleve a cabo en forma temporal la prestación del servicio público de agua potable cuando exista imposibilidad del Ayuntamiento de prestar el mismo.

De ello deriva que la titularidad de la asignación sobre aguas nacionales para la prestación del servicio público de agua potable corresponde a los Ayuntamientos, y solo en los casos en que mediante convenio se haya pactado que la administración de los sistemas de agua potable se llevara a cabo por el Estado, la asignación se hará a favor de los organismos o entidades paraestatales correspondientes. Esto en términos de los artículos 81 y 82 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, los que se transcriben a continuación:

(Énfasis añadido).

"ARTÍCULO 81.- La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales o del subsuelo para centros de población o asentamientos humanos, se efectuará mediante asignación para uso público urbano que otorgue "La Comisión", en los términos del artículo 44 de la "Ley".

"La Comisión" otorgará la asignación a los respectivos municipios o en su caso al Gobierno del Distrito Federal."

"ARTÍCULO 82.- "La Comisión" podrá otorgar:
I. La asignación de agua a organismos o entidades paraestatales o paramunicipales **que administren los sistemas de agua potable y alcantarillado de los municipios, así como de las zonas conurbadas o intermunicipales;**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE
SUBSECRETARÍA
SECCIÓN DE TRAI
CONSTITUCION
BICONST.

II. La concesión de agua para servicio público urbano a ejidos, comunidades, organizaciones de colonos o usuarios que administren sistemas de agua potable y alcantarillado, y

III. La concesión de agua para empresas que administren fraccionamientos.

El otorgamiento de las concesiones o asignaciones a que se refiere el presente artículo, se efectuará en caso de que el municipio no pueda prestar directamente el servicio o cuando medie acuerdo favorable del mismo.

En caso de que conforme a la ley se concesionen por el municipio, total o parcialmente, los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, las asignaciones de agua que expida "La Comisión" se harán en todo caso a los municipios que tienen a su cargo la prestación de dicho servicio público.

Lo dispuesto en este artículo para los municipios se aplicará en lo conducente para el Distrito Federal."

Por lo tanto, es contrario a la Constitución Federal, que la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora, sea la titular de títulos de asignación para la prestación del servicio público de agua potable en el Ayuntamiento de Hermosillo, como en el caso en comento acontece, ya que el mismo no es el administrador de dicho servicio, ni existe convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el titular del Ejecutivo del Estado en dicho sentido.

La Comisión Estatal del Agua no puede intervenir en la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Hermosillo, sin que medie convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado en tal sentido.

Los artículos 79 fracción XVI, 136 y 138 de la Constitución del Estado de Sonora, establecen que se requiere de convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, para que el primero intervenga en la prestación del servicio público de agua potable:

(Énfasis añadido).

"ARTÍCULO 79.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

XVI.- Celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, en los términos de Ley, de los que se deriven la asunción por parte del Estado de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos del Gobierno Federal, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario.

Asimismo, **podrá celebrar convenios con los Ayuntamientos de la Entidad**, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior, o bien la asunción de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos del Gobierno Estatal cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario, **así como para que el Estado se haga cargo, temporalmente, en los términos de las leyes aplicables, de algunos de los servicios públicos de competencia municipal."**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SUBSECRETARIA G
CIÓN DE TRAM
CONSTITUCION
INCONSTITU

"ARTÍCULO 136.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

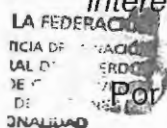
XVI.- En los términos de Ley, celebrar convenios de coordinación con los Ejecutivos Estatal y Federal, a efecto de coordinar acciones de interés común, asumir el ejercicio de funciones, la ejecución y operación de obras, la prestación de servicios públicos, y en general, cualquier otra actividad o propósito de beneficio colectivo, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario."

"ARTÍCULO 138.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de Municipios del Estado con Municipios de otro u otros Estados, deberán contar con la aprobación del Congreso del Estado.

Asimismo, **cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.**

Los servicios públicos municipales también podrán ser prestados mediante concertaciones con particulares o a través del otorgamiento de concesiones, en los términos de las leyes aplicables.

En los casos en que los servicios públicos de competencia municipal se encuentren a cargo de particulares, podrán revocarse para que los Municipios los presten de manera directa, por razones de orden e interés público y en los términos que establezca la Ley."



Por otro lado, la Ley de Gobierno y Administración Municipal establece que, se aprobarán por mayoría calificada del cabildo los convenios que celebren los Ayuntamientos del Estado con el Gobierno del Estado, para que éste se haga cargo de alguno de los servicios públicos o para que se preste o ejerzan coordinadamente por el Estado y el Municipio, así como la obligación de publicarse el mismo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

(Énfasis añadido).

"ARTÍCULO 259.- El Ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente forma:

I. Directamente, a través de sus propias dependencias administrativas y órganos desconcentrados;

II. A través de los organismos públicos descentralizados creados para tal fin y empresas de participación municipal mayoritarias;

III. Mediante el régimen de concesión y concertación con particulares; y

IV. En coordinación y asociación, con ayuntamientos del Estado o de otro u otros Estados, **o mediante la celebración de convenios con el Ejecutivo del Estado para que éste los preste en forma temporal o coordinadamente con el Ayuntamiento.**

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de la asociación de municipios del Estado con municipios de otro u otros Estados, los

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
SECRETARÍA DE
SECCIÓN DE TRAM
CONSTITUCIONAL
INCONSTIT

municipios del Estado de Sonora deberán contar con la aprobación del Congreso del Estado."

"ARTÍCULO 260.- En la prestación de los servicios públicos deberá observarse lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Sonora, la presente Ley y las Leyes de Desarrollo Urbano y de Salud para el Estado de Sonora, así como las disposiciones reglamentarias que se deriven de éstas, las Normas Oficiales y Técnicas Mexicanas y los demás ordenamientos jurídicos federales y estatales aplicables."

"ARTÍCULO 285.- Los convenios que el Ayuntamiento celebre con el Gobierno del Estado a efecto de que éste preste en forma temporal alguno de los servicios públicos municipales, o para que se preste coordinadamente entre el Estado y el Municipio, contendrán, por lo menos, lo siguiente:

- I. La especificación del servicio público o aspecto del mismo, así como las áreas o territorio del Municipio donde se prestará;
- II. Las acciones e inversiones a las que se comprometan las partes para la prestación del servicio público;
- III. La forma y condiciones en que se prestará el servicio público;
- IV. La dependencia o entidad de la administración pública estatal que tendrá a su cargo la prestación del servicio público objeto del convenio;
- V. La forma en que se determinarán las tarifas por la prestación del servicio público, las cuales deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado y destinarse exclusivamente para realizar todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento, eficiencia, eficacia y ampliación del mismo;
- VI. La observancia de esta Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como a los programas establecidos relativos al servicio público, en cuya formulación deberán participar las partes; y
- VII. La vigencia del convenio y las formas de extinción del mismo, así como el tribunal competente para el caso de controversias en su interpretación y aplicación."

"ARTÍCULO 287.- Una vez formalizados dichos convenios deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado."

"ARTÍCULO 322.- Para la más eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de las funciones de su competencia, los municipios podrán coordinarse y asociarse con uno o más municipios del propio Estado o de otras entidades federativas, o bien podrán convenir con el Gobierno del Estado para que éste se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos o se preste o ejerza coordinadamente por el Estado y el Municipio respectivo.

Los convenios que se celebren entre Ayuntamientos del Estado requieren del acuerdo respectivo aprobado por mayoría absoluta; los que se celebren entre Ayuntamientos del Estado con Ayuntamientos de otra u otras entidades federativas, requieren del acuerdo del Ayuntamiento aprobado por mayoría calificada, además de la aprobación del Congreso del Estado. Asimismo, **se requiere acuerdo aprobado por mayoría calificada del Ayuntamiento para la celebración de convenios entre Ayuntamientos con el Gobierno del Estado a fin de que éste se haga cargo de algún servicio o función pública de competencia exclusiva del Municipio o se preste o ejerza coordinadamente por el Estado y el Municipio."**

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SUPREMA CORTE DE J
SUBSECRETARÍA GEN
CIÓN DE TRÁMITE
CONSTITUCIONAL

En tales términos, se requiere de un convenio celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y el Gobierno del Estado de Sonora en el que, se establezca que la prestación del servicio público de agua potable se prestará por el Gobierno del Estado por conducto de la Comisión Estatal del Agua, (fijándose la temporalidad del mismo) en el que se cumpla con los requisitos que se contienen en los artículos antes citados, incluida su publicación en el Boletín Oficial.

De lo anterior se observa, que al no existir convenio alguno entre el Municipio de Hermosillo y el Gobierno de Sonora, al no haberse publicado éste, es improcedente y contrario a derecho el que los poderes demandados hayan otorgado los títulos de asignación de referencia, pues no se encuentran colmados los requisitos previstos en el ordenamiento, por lo cual, dichos actos son inválidos.

SÉPTIMO.- Violación de los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en los artículos 14 y 16 en relación con los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Dirección de Administración del Agua no podía emitir los títulos de asignación 02SON150083/09HBDA10, 02SON150085/09HBDA10 y 02SON150734/09HBDA11 a favor de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora por no existir disponibilidad efectiva de aguas.

Primeramente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 Bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales al ejecutivo federal compete asegurarse que las asignaciones de agua se fundamenten en la disponibilidad efectiva del agua en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas:

(Énfasis y subrayado agregado).

"ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

VII. El Ejecutivo Federal se asegurará que las concesiones y asignaciones de agua estén fundamentadas en la disponibilidad efectiva del recurso en las regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas que correspondan, e instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas hidrológicas del país y el de los ecosistemas vitales para el agua;.."

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, debemos entender por disponibilidad efectiva aquello que es real y verdadera.

SIN TEXTO



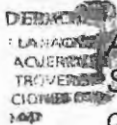
PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARIA GENERAL
SECCION DE TRAMITES DE
CONSTITUCIONAL Y
INCONSTITUCION

Ahora bien, los actos cuya invalidez se demandan, parten de un presupuesto falso, de donde deriva que sean indebidamente fundados y motivados, ya que los volúmenes de escurrimientos que el Río Yaqui proporciona son insuficientes para trasvasar aguas a otra cuenca, ya que si bien es cierto que la cuenca está equilibrada, y no está sobreexplotada, esto de ninguna manera implica que existan en la misma excedentes.

Al gozar el ayuntamiento que represento del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, las autoridades administrativas solamente podrán dotar de agua a un diverso ente que trate de obtener aguas del mismo caudal, con el sobrante que haya, después de que este aproveche el volumen a que tiene derecho; debiéndose entender que la autoridad está restringida a no afectar los derechos legítimamente adquiridos como son los del Municipio de San Ignacio Río Muerto, siendo aplicable por analogía al caso en comento la siguiente tesis:

(Énfasis añadido).

"Quinta Época. Registro: 317700. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. CXX. Materia(s): Administrativa. Tesis: .Página: 618.



AGUAS DE CONCESION FEDERAL

Si el dueño de una pequeña propiedad, inafectable goza de concesión de aguas federales para riego y se le señaló por la Secretaría de Agricultura el volumen necesario para el riego de dicha pequeña propiedad, las autoridades administrativas **solamente podrán dotar de agua a un grupo ejidal que trate de obtener aguas del mismo caudal, con el sobrante que haya, después de que el quejoso aproveche el volumen que le fue concedido;** debiéndose entender que la facultad que confiere el artículo 89 del Código Agrario al Ejecutivo de la Unión para modificar sin compensación los derechos de usuarios de aguas de propiedad nacional, no es sin restricción, sino procurando siempre cuidar que no se afecten los derechos legítimamente adquiridos por los pequeños propietarios.

Amparo administrativo en revisión 5186/53. 6 de mayo de 1954. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos."

De lo anterior se desprende que dada la escasez del vital líquido durante los últimos años en la cuenca del Río Yaqui, se han reducido las extracciones que estaban dentro del plan autorizado, esto, con el objetivo de evitar una sobreexplotación de la cuenca hidrológica, ya que con la realidad actual de ésta, las aportaciones no son suficientes para proporcionar con seguridad los volúmenes concesionados y asignados, siendo que históricamente se han visto

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE
JURISPRUDENCIA
FEDERAL
SECRETARÍA DE
JUSTICIA
CONSTITUCIONAL
INCONSTITUCIONAL

disminuidas las aportaciones al sistema de presas del Río Yaqui tal y como ya quedó asentado.

En segundo término, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales, se establece como causa para negar la concesión, asignación o permiso de descarga, el que la misma afecte el caudal mínimo ecológico, que forma parte del uso ambiental al que se refiere la fracción LIV del artículo 3 de la Ley, conforme a los reglamentos regionales respectivos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracción LIV de la Ley de Aguas Nacionales "Uso Ambiental" o "Uso para conservación ecológica" es el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema.

De lo anterior, deriva que para poder determinar que existe disponibilidad del recurso, previamente a otorgar cualquier asignación, se debió de llevar a cabo por la autoridad un cálculo de dicho factor a efecto de que este se respetara, y se diera a conocer en su resolución, así como de todas aquellas disposiciones en que se basó y los estudios que se realizaron para determinar el mismo, lo que no se hizo.

Al no llevarse a cabo el cálculo del caudal de reserva ecológica en el cauce del Río Yaqui, no puede hablarse de disponibilidad efectiva del recurso, ya que para ello primeramente, se necesitaba determinar éste, así como los volúmenes concesionados y asignados previamente, o comprometidos, para después de analizar dichos aspectos poder determinar si existía o no una disponibilidad efectiva del recurso.

Debido a lo anterior, y toda vez que no se dio a conocer por la autoridad el cálculo del caudal de reserva ecológica que se debe de respetar para el Río Yaqui, la resolución se encuentra afectada de una indebida fundamentación y motivación, ya que al otorgar los títulos de asignación de derechos de aguas nacionales a la Comisión Estatal del Agua se omitió tomar en cuenta el caudal de reserva ecológica y con ello se incumple con la ley y con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE JUSTI
SUBSECRETARÍA GENE
CIÓN DE TRÁMITES
CONSTITUCIONALES Y
RECONSTITUCI

OCTAVO.- Violación de los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Dirección de Administración del Agua no podía emitir los títulos de asignación 02SON150083/09HBDA10, 02SON150085/09HBDA10 y 02SON150734/09HBDA11 en virtud de encontrarse vigente una veda sobre las aguas del Río Yaqui.

Primeramente, tenemos que no se observó la declaratoria de veda de fecha 27 de julio de 1931, la cual constituye una norma general y abstracta, de observancia general, derivada de la facultad reglamentaria que concede la Constitución al Poder Ejecutivo para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes, y al estar ésta vigente, obliga tanto a los particulares como a las autoridades en su actuación, en tanto no sea derogada o abrogada. La declaratoria en comento establece:

"ACUERDO.

I.- De conformidad con el citado artículo 21 de la Ley de Aguas vigente, se refrenda y se declara en vigor, sin solución de continuidad, el Decreto de 8 de octubre de 1927, que establece la veda de concesiones de aguas sobre el río Yaqui."

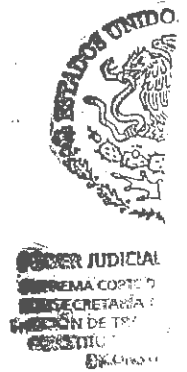
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, las zonas de veda son áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

El artículo 40 fracción II de la Ley de Aguas Nacionales establece que solamente mediante decreto puede modificarse o suprimirse la veda, siendo que en el caso que no existe decreto alguno que establezca el levantamiento de la misma, lo que por sí sólo implica una falta de fundamentación y motivación del acto de autoridad, para lo cual me permito transcribir el citado artículo.

(Énfasis añadido).

"ARTÍCULO 40. Los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda contendrán la ubicación y

SIN TEXTO



delimitación de la misma, así como sus consecuencias o modalidades.

El decreto de veda correspondiente deberá señalar:

- I. La declaratoria de utilidad pública;
- II. Las características de la veda, de su modificación o de su supresión;
- III. Las consecuencias previstas al instrumentar la veda;
- IV. La ubicación y delimitación de la zona de veda;
- V. La descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados;
- VI. El diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, el volumen disponible de agua y su distribución territorial, así como los volúmenes de extracción, recarga y de escurrimiento;
- VII. Las bases y disposiciones que deberá adoptar "la Autoridad del Agua", relativas a la forma, condiciones y, en su caso, limitaciones, en relación con las extracciones o descargas en forma temporal o definitiva;
- VIII. La expedición de normas que regulen los aprovechamientos y descargas, en relación con la fracción anterior, incluyendo el levantamiento y actualización de padrones;
- IX. Los volúmenes de extracción a que se refieren las dos fracciones anteriores, y
- X. La temporalidad en que estará vigente la veda, reserva de agua o zona reglamentada, la cual puede prorrogarse de subsistir los supuestos de los Artículos 38 y 39 de la presente Ley.

El Organismo de Cuenca que corresponda, promoverá la organización de los usuarios de la zona de veda respectiva, para que participen en su instrumentación."

En tales términos al encontrarse vigente la citada veda, no pueden haberse emitido las asignaciones de aguas que tienen por objeto trasvasar agua del Río Yaqui a la altura de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo" a la ciudad de Hermosillo, Sonora, ubicada en el cuenca hidrológica del Río Sonora, para destinarla al abastecimiento de la referida ciudad y que necesariamente incidirá en el volumen de agua disponible para los usuarios ubicados en la parte baja de la cuenca del Río Yaqui, así como la recarga de los mantos freáticos.

En segundo término, los actos de la autoridad también dejan de observar indebidamente el decreto de fecha 22 de febrero de 1949, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 1949, en el cual se destinan las aguas del Río Yaqui para el riego de una superficie aproximada de 220,000 hectáreas

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA GENERAL
CON DE TRAMITES DI
CONSTITUCIONALES Y E
INCONSTITUCION

que se encuentran ubicadas en los Municipios de Empalme, Cajeme, BÁCUM y Navojoa, del Estado de Sonora.

El citado decreto establece:

"SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS"

AVISO por el que se dan a conocer los lineamientos generales del proyecto conforme al cual se han iniciado y se desarrollarán las obras del Distrito de Riego del río Yaqui, Son., así como la delimitación de tierras que abarcará el mencionado Distrito.

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- Secretaría de Recursos Hidráulicos.

AVISO.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de Riegos, se hace saber al público que habiéndose aprobado la construcción de las obras necesarias para integrar el Distrito de Riego del río Yaqui, Son., construcción que se viene efectuando y se llevará a cabo totalmente por el Gobierno Federal, a continuación se da a conocer los lineamientos generales del proyecto conforme al cual se han iniciado y se desarrollarán dichas obras, así como la delimitación de las tierras que abarcará el mencionado Distrito de Riego.



EDFRA
DE LA NAC
DE ACUERDO
ONT GOVER
ACCIONES
UDAD

I.- Se aprovecharán las aguas del río Yaqui, Son., para el riego de una superficie aproximada de 220,000 hectáreas que se encuentran ubicadas en los Municipios de Empalme, Cajeme, BÁCUM y Navojoa del Estado de Sonora. De esta superficie 115,000 hectáreas ya tenían servicio de riego, aunque en parte sujeto a las eventualidades de escurrimiento del río, por lo que mediante la construcción, de las obras correspondientes, el servicio de riego será mejorado y asegurado. El resto, o sean 105,000 hectáreas aproximadamente, que en la actualidad carecen totalmente de riego, contarán con riego asegurado mediante las obras en construcción.

II.- Las obras existentes con las que en las condiciones indicadas se ha venido dando el servicio de riego de las 115,000 hectáreas primeramente citadas son: la presa de La Angostura sobre el río Bavispe, afluente del Yaqui, con capacidad de 840 millones de m³; la presa derivadora de Hornos, la toma de Jacatacari; los canales de la margen derecha ubicados en las colonias yaquis y los de la margen izquierda denominadas Actual y Occidental, así como su red de canales laterales. Las obras cuya construcción se ha iniciado y se realizará para integrar el Distrito de Riego del río Yaqui, son: la presa Álvaro Obregón sobre el citado río, con capacidad de 3,000 millones de M³; el canal alto y su red de canales laterales; las redes de drenaje y de caminos de servicio y las obras de arte y demás estructuras que complementan el sistema de riego.

III.- Los límites de este Distrito son los siguientes: al Norte, el canal principal de la margen derecha del río Yaqui; al Este, el canal Alto de la margen izquierda del río Yaqui y el río Mayo; al Sur, y al Oeste, el litoral del Golfo de California.

SIN TEXTO



Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley de Riegos vigente, se modifica en los términos de dicho artículo la declaración de veda del río Yaqui de fecha 27 de julio de 1931, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación del 1° de septiembre del mismo año.

Para los efectos del artículo 7° de la Ley de Riegos, los propietarios o poseedores de tierras comprendidas dentro del Distrito de Riego de que se trata, deberán presentar las manifestaciones a que el mismo precepto se refiere dentro de los tres meses siguientes a la publicación del presente aviso, en las oficinas de esta Secretaría en Ciudad Obregón, Son., o bien en las de la Dirección General de Aprovechamientos Hidráulicos, ubicadas en la Calle Artículo 123 Núm. 90, de la Ciudad de México."

Esto por dos razones:

a) Porque el poder ejecutivo asignó el aprovechamiento de las aguas del Río Yaqui al riego agrícola;

b) Y además por que fue destinada para ser usada en los Municipios de Empalme, Cajeme, Bécum y Navjoa, y no como se pretende utilizar en el Municipio de Hermosillo para usos diversos.

Así mismo se pasa por alto el acuerdo presidencial de fecha 16 de noviembre de 1955 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del mismo año, en el que se estableció el Distrito de Riego del Río Yaqui, Sonora, ubicándolo en los Municipios de Cajeme, Etchojoa, Bécum, Navjoa y Guaymas (hoy también San Ignacio Río Muerto por haberse formado con posterioridad con territorio de dicho municipio) y se declaró de utilidad pública la construcción de las obras que lo forman.

En los considerandos y resolutivos de dicho acuerdo se establece que las aguas del Río Yaqui deben aprovecharse en el riego de terrenos, siendo que al ser los recursos hidráulicos disponibles insuficientes es necesario fijar límites definitivos al Distrito de Riego, evitando que se distraigan en el riego de otras tierras fuera del Distrito al que están destinadas. Al efecto me permito transcribir las partes conducentes:

(Énfasis añadido).

"Que por resolución de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de fecha 22 de febrero de 1949, publicada en el "Diario Oficial de la Federación", correspondiente al 18 de marzo del mismo año, se dieron a conocer los lineamientos generales conforme a los cuales

SIN TEXTO



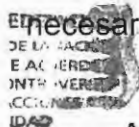
PODER JUDICIAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRÁMITES DE
CONSTITUCIONALES Y DE
INCONSTITUCIONALES

se construiría el Distrito de Riego del río Yaqui Sonora, y se limitó en forma provisional éste, pero estudios posteriores han demostrado que los recursos hidráulicos disponibles, son insuficientes para regar todos los terrenos comprendidos dentro de dichos límites, por lo que, es necesario establecer dicho Distrito, fijándose los límites definitivos, para lo cual es indispensable reducir la superficie del mismo.

Que de acuerdo con los estudios hidrológicos hechos sobre el funcionamiento de estas obras, es necesario disponer de todos los escurrimientos del río Yaqui y su cuenca tributaria hasta la presa Álvaro Obregón y evitar que se distraigan en el riego de otras tierras fuera del Distrito en perjuicio de éste, a que están destinadas....

SEGUNDO.- Se declara subsistente, por tiempo indefinido, la veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del río Yaqui y de su cuenca tributaria de fecha 27 de julio de 1931, publicada en el "Diario Oficial" de la Federación correspondiente al 30 de septiembre del mismo año."

Por otra parte, mediante decreto presidencial de fecha 20 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del mismo año se declaró de utilidad pública la ampliación del Distrito de Riego del Río Yaqui, Sonora, en una superficie de 8,500-00-00 hectáreas, ubicadas en el municipio de Navojoa, en el Estado de Sonora, así como la construcción de las obras necesarias y la adquisición de los terrenos para construirlas y operarlas.



Ahora bien se da el interés legítimo mi representado para impugnar la expedición de los títulos de asignación por parte de la Dirección de Administración del Agua a favor de la Comisión Estatal del Agua en términos de la fracción I del artículo 105 constitucional, en virtud de que la conducta de la autoridad demandada causa perjuicio y priva de un beneficio a la parte que promueve, en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentra al producir una disminución y menoscabo en los derechos de los que es titular, ya que se afectan los volúmenes de agua en los municipios que forman parte del Distrito de Riego del Río Yaqui, para trasladarse los mismos hasta la ciudad de Hermosillo, para el uso público urbano, con lo que se rompe el equilibrio hídrico y ecológico existente en la cuenca del Río Yaqui, lo que implica que se vea afectado el acceso del Municipio y sus habitantes al citado recurso violentándose los derechos humanos de los pobladores.

Lo anterior es así, en virtud de que el sistema hidrológico del Río Yaqui no soporta la extracción que se pretende con el Acueducto Independencia, y esto sólo redundará en el agotamiento del mismo en perjuicio de la población de la cuenca del Río Yaqui.

SIN TEXTO



NOVENO.- Se actualiza una violación al derecho de audiencia previsto en el artículo 14, en relación con los diversos 4, 27 y 115 fracciones III inciso a) y V inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto ya que, en la elaboración y aprobación del Programa Sonora SI, no se le otorgó intervención alguna, ni se consensó en forma previa con la Tribu Yaqui, lo que le afecta de modo especial en virtud de la posición que guarda frente a los actos impugnados.

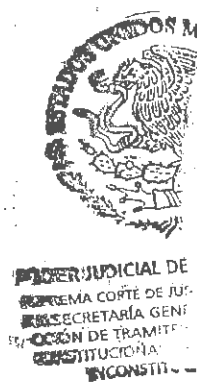
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, a nadie podrá privársele de sus bienes o derechos, sin que previamente se le conceda la garantía de audiencia.

El Programa Sonora SI elaborado por el ejecutivo del Estado de Sonora, prevé como una de sus acciones la construcción del "Acueducto Independencia" con el objeto de sustraer aguas del Río Yaqui a la altura de la presa Plutarco Elías Calles "El Novillo" para trasvasarlas a la cuenca hidrológica del Río Sonora, en donde se encuentra ubicado el Municipio de Hermosillo, Sonora, para lo cual se llevó a cabo la licitación para la construcción del citado acueducto.

Dichos actos vienen a incidir negativamente sobre la situación de hecho que prevalece a favor del Municipio de San Ignacio Río Muerto, en virtud del título de asignación que para la prestación de los servicios públicos que le competen le fue conferido, afectando la disponibilidad de las aguas, así como los servicios públicos que presta a su población y el medio ambiente del mismo. Consecuentemente, se le debió de notificar de dicho programa, previo a su aprobación, al Municipio que represento, a efecto de que estuviéramos en condiciones de expresar nuestra opinión al respecto y de presentar pruebas en apoyo de nuestras afirmaciones, así como consensarse previamente con la Tribu Yaqui, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, que obliga a que las acciones del sector público, social o privado que impacten los recursos naturales sobre los cuales los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho preferente para acceder de manera autónoma a su uso y disfrute, deberán ser previamente consensuadas con ellos, por lo que al no haberse realizado, los actos hoy impugnados son inválidos.

Lo anterior, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 fracción V inciso c) de la Constitución Federal, los municipios están facultados para participar en los planes de desarrollo regionales. Siendo que a pesar de que

SIN TEXTO



el mismo puede ser considerado como tal, no se nos dió intervención alguna, de donde deriva la invalidez del mismo.

DÉCIMO.- El proceso de licitación del Acueducto Independencia viola los requisitos de debida fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 en relación con los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de lo siguiente:

Tal y como lo ha informado la Auditoria Superior de la Federación, el proceso de licitación no se ajustó a un proceso que garantizara las mejores condiciones disponibles, en virtud de los siguientes razonamientos:

1.- El Fondo de Operación de Obras Sonora SI, omitió solicitar a la Secretaría de la Función Pública la designación de un testigo social veinte días hábiles antes de la publicación de la convocatoria e informarle que los trabajos se efectuarían con recursos tanto federales como estatales, situación que originó que los procedimientos de licitación se realizaran sin un testigo social, quien con conocimiento de las disposiciones legales y administrativas vigentes propusiera mejores acciones que igualaran las condiciones de los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones y aquellas que promovieran la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y, por consiguiente, el combate de la corrupción. Situación que resulta contraria a los artículos 1 fracción VI, 27 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, punto 3; párrafo tercero, del lineamiento octavo "de la designación de testigo social" del acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2004 .

2.- Se dejó de observar en el proceso de licitación los artículos 31 párrafo segundo 36 último párrafo y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 36, 37 A, fracción II, 37 B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Esto en virtud de que en las bases de la licitación pública, el Fondo de Operación de Obras Sonora SI incluyó requisitos que limitaron la competencia y libre concurrencia de los participantes, como los siguientes:

SIN TEXTO



a) Documento con que se acredite que el proveedor de tubería cuenta con autorización de la SEMARNAT y tiene experiencia de 10 años en la aplicación de recubrimientos conforme a las normas AWWWAC-210 y AWWWAC-203.

b) Relación de obras similares en magnitud y complejidad a la convocada, realizadas dentro de los últimos 10 años con administraciones públicas federales, estatales o municipales, así como con particulares, a fin de acreditar su especialidad y capacidad técnica. La relación debe acreditar, como mínimo, lo siguiente:

- Haber diseñado o proyectado por lo menos cinco plantas para un gasto de 500 lps o más y adjuntar copia de los contratos respectivos.

- Haber diseñado o proyectado por lo menos tres proyectos de caminos sinuosos de 20 o más km de longitud y adjuntar copia de los contratos correspondientes.

- Acreditar con copia de contratos que ha realizado diseños o proyectos de acueductos de 60 km de longitud, como mínimo, y por lo menos tres proyectos con capacidad para 500 lps o más, que considere un tramo de 5 km de línea de impulsión o a presión, como mínimo, y el resto por gravedad.

a) Certificación vigente del Sistema de Gestión de Calidad, según los requisitos establecidos en la Norma Internacional ISO-9001:2000 o su equivalente nacional NMXCC- 9001-IMNC-2000, cuyo alcance incluya la construcción de proyectos de infraestructura y la administración de proyectos.

b) Certificación vigente de un Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14001:2004 o su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2004, cuyo alcance incluya la construcción de proyectos de infraestructura y la administración de proyectos.

c) Copia del certificado de un organismo de certificación de sistemas de gestión ambiental, validado por la entidad mexicana de acreditación.

d) Se indicó que no se subcontrataría.

e) Especificaciones del suministro e instalación de la tubería de acero al carbón.

f) Formatos para identificar a los encargados de la ejecución y administración de la obra.

SIN TEXTO



g) Descripción de la planeación integral y procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

h) Los encargados de la administración y ejecución de la obra deberán tener experiencia mínima de 10 años en obras de características similares.

i) Acreditar experiencia y capacidad técnica y administrativa en obras similares en los últimos 5 años.

Además de lo anterior, la licitante extralimitó los requisitos, pues agregó que la presentación incompleta o la omisión de cualquier documento, con todos sus anexos, no respetar punto por punto los requisitos de las bases o no ajustarse al contenido de los formatos e indicaciones de los anexos serían causas para desechar la propuesta.

No obstante que algunos requisitos y condiciones se modificaron a solicitud de los licitantes en la junta de aclaraciones, como fueron entre otros la autorización de subcontratación del proyecto ejecutivo, inspecciones radiográficas, fletes y acarreos; y modificaciones en las especificaciones del suministro e instalación de la tubería de acero al carbón y en los formatos para identificar a los encargados de la ejecución y administración de la obra; otros requisitos permanecieron, tales como la acreditación de la especialidad técnica de los participantes y sus certificaciones vigentes del sistema de gestión de calidad y ambiental, y se aplicaron, entre otros, para desechar a seis de las ocho propuestas; por lo que sólo las propuestas de las empresas Exploraciones Mineras del Desierto, S.A. de C.V., y TRADECO, Industrial, S.A. de C.V., fueron evaluadas para la adjudicación del contrato, sin que hubieran cumplido con la experiencia solicitada por la convocante.

En las propuestas presentadas ninguno de los licitantes cumplió con la experiencia y capacidad técnica requeridas en las bases de la licitación, las cuales debieron acreditarse en el Anexo 6.2 de las bases; por otra parte, el FOOSÍ incumplió lo dispuesto por el artículo 38, párrafo cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debido a que la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato fueron deficientes y como resultado de la mala evaluación, se adjudicó al 4o lugar, a una Asociación en Participación, conformada por 16 empresas del Estado de Sonora.

3. El Fondo de Operación de Obras Sonora SI señaló en las bases de licitación que el contrato se adjudicaría a la proposición que resultara

SIN TEXTO



económicamente más conveniente para el Estado y que se usaría el mecanismo de valoración en puntaje para evaluar las proposiciones, incluyendo los criterios relativos al precio (50 puntos), contenido nacional (10 puntos) y calidad, atendiendo en este último los rubros de especialidad en mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza (5 puntos) y capacidad técnica del personal responsable de los trabajos (3 puntos); sin embargo, en el documento denominado Aclaraciones adicionales de la convocante, sin fecha, la entidad fiscalizada adicionó la valoración en puntaje del criterio relativo a la certificación relacionada con el objeto de la obra (4 puntos) y la evaluación del proyecto ejecutivo (4 puntos).

Lo anterior denota que se dejó de observar el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos que regulan las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, relativa a la propuesta que resulte económicamente más conveniente para el Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2005. Esto en virtud de que omitió incluir los criterios relativos a la experiencia, en cuanto al mayor tiempo del licitante realizando obras similares (5 puntos), ausencia de antecedentes de afectación por garantías para responder por vicios ocultos o mala calidad (3 puntos), financiamiento (10 puntos) y oportunidad en el grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos (10 puntos). Además, en el rubro de especialidad en el mayor número de contratos ejecutados de la misma naturaleza, se comprobó que los participantes no obtuvieron puntuación, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de licitación.

Además de lo anterior, se determinó improcedente incluir en la adjudicación por puntos el criterio de la evaluación del proyecto ejecutivo, ya que una parte de los trabajos por contratar a precio alzado consistió en realizar los estudios de mecánica de suelos, topográficos e hidrológicos y el proyecto ejecutivo.

El FOOSSÍ incluyó un criterio ambiguo relativo a la evaluación del proyecto (4 puntos), fuera de la normativa aplicable, por lo que la contratación de la obra no se ajustó a un proceso que garantizara las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

4. El Fondo de Operación de Obras Sonora SI omitió elaborar, controlar y dar seguimiento a los trabajos del proyecto ejecutivo y a la obra mediante su

SIN TEXTO



registro en la bitácora electrónica, ya que ésta se llevó en forma convencional sin contar con la autorización de la Secretaría de la Función Pública, dejando de aplicar lo dispuesto por los artículos 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5. El Fondo de Operación de Obras Sonora SI no observó las siguientes reglas generales para el uso de la bitácora: las hojas originales y sus copias no están referidas al contrato; no se asentó el domicilio y teléfono del personal autorizado ni se indicaron las características del sitio donde se desarrollarían los trabajos; y no se inscribieron los documentos que permitieran identificar oficialmente a los residentes de obra y, en su caso, al supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes serían responsables de realizar los registros en la bitácora, ni se precisó al personal autorizado para anotar dichos registros.

Además, se omitió asentar inmediatamente después de la nota de apertura el horario en que se podrían consultar y asentar notas, el cual debería coincidir con las jornadas de trabajo de campo; establecer el plazo máximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendrían por aceptadas vencido dicho plazo; prohibir la modificación de las notas ya firmadas, aun cuando se tratara del responsable de la anotación original; y establecer la obligación de asentar los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que debían implementarse.

En la bitácora convencional el FOOSSÍ omitió hacer referencia al contrato en las hojas originales y sus copias; no se asentó el domicilio y teléfono del personal autorizado ni se indicaron las características del sitio donde se desarrollarían los trabajos; y no se inscribieron los documentos que permitieran identificar oficialmente a los residentes de obra y, en su caso, al supervisor, así como al superintendente por parte del contratista, quienes serían responsables de realizar los registros en la bitácora, ni se precisó al personal autorizado para anotar dichos registros, incumpliendo con lo dispuesto por los artículos 94, 95 y 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De donde deriva la invalidez del mismo en virtud de haberse violado la seguridad jurídica, al haber actuado la autoridad en forma arbitraria, y no realizar una exacta aplicación de la ley.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE
SUPREMA CORTE DE J
SECRETARÍA DE
CIÓN DE TRAMITE
CONSTITUCION
CONSTITUCION

El interés legítimo del Ayuntamiento para impugnar este acto deriva primeramente de que la construcción y operación del citado acueducto viene a afectar la situación de hecho en que se encuentra el mismo, al venir a disminuir la disponibilidad de aguas en la parte baja de la cuenca del Río Yaqui, así como a alterar el equilibrio hídrico y ecológico de la misma, afectando la zona de humedales que se ubica dentro del mismo, además de que implica un enorme despilfarro de los recursos públicos del estado al que pertenecemos.

Además de que se omitió el análisis de otras opciones alternas al Acueducto Independencia en las cuales se tiene mayor factibilidad técnica, económica, ambiental y social para dotar de agua a la población de Hermosillo en donde se tiene suficientes recursos hídricos, solo hay que aplicar la prelación del derecho al uso del agua, establecida en la ley para referenciar el abastecimiento humano sobre otros usuarios de esa cuenca que están explotando aguas nacionales a niveles irracionales e incontrolables por la autoridad competente para limitarlo, y que tienen a la población de Hermosillo sin agua suficiente y sin autoridad municipal, estatal o federal que haga valer los derechos de su población.

DECIMO PRIMERO. Los actos emitidos por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Sonora son inválidos por no respetar el Convenio 169 de OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.

El artículo 6 del multicitado Convenio, establece una serie de garantías procedimentales al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Consecuentemente si los actos de las autoridades pueden afectar los servicios públicos a que tienen derecho a recibir la Tribu Yaqui, y que el municipio de encuentra obligado a proporcionarles de conformidad con el artículo 115 Constitucional y 41 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora la disponibilidad de agua del Río Yaqui a la cual tienen derecho en virtud del decreto de 1940 que les concede derechos sobre las aguas de la presa "La Angostura" para sus actividades productivas, su medio ambiente y su cultura, debieron de ser previamente consultados, lo que no sucedió y de donde deriva la invalidez de los mismos.

CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN.

SIN TEXTO



De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la suspensión respecto de los actos materia de la controversia así como de los efectos y consecuencias de los mismos, para el efecto de que se suspenda la construcción del Acueducto Independencia, no se ponga el mismo en operación y consecuentemente no se trasvasen las aguas del Río Yaqui a la cuenca del Río Sonora en virtud de los títulos de asignación otorgados por la Dirección de Administración del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua a favor de la Comisión Estatal del Agua.

Es procedente la concesión de la medida cautelar solicitada, en virtud de que la misma se solicita sobre actos y no sobre normas generales, además de que la misma no pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, que han sido definidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Federal, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica, ya que la construcción y operación de un acueducto no puede ser considerada como un principio básico de la estructura política del país o de protección y efectividad de las disposiciones constitucionales que dé estabilidad y permanencia a la nación mexicana, ni la concesión de la medida cautelar suspensorial implica una afectación grave a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener el solicitante, pues mientras que con la suspensión de la obra referida se deja de beneficiar a los futuros usuarios de una obra que no existe previamente y se preserva la materia de la controversia, con la negativa a otorgarla se presenta el riesgo de que cesen los efectos del acto cuya invalidez se demanda y, por tanto, que queden fuera de control actuaciones autoritarias contrarias al orden constitucional, además de que se causen daños de imposible reparación en los humedales, en el equilibrio hidrológico y ecológico de la cuenca del río Yaqui. Siendo aplicable la siguiente tesis:

"Novena Época

Registro: 184746

Instancia: Segunda Sala

Tesis Aislada

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVII, Febrero de 2003*

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. II/2003

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D
SISTEMA CORTE DE J
SECRETARÍA DE
CIÓN DE
CONSTITU
CONSTITUCIÓN

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE EN PELIGRO A LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI IMPLICA UNA AFECTACIÓN GRAVE A LA SOCIEDAD EN PROPORCIÓN MAYOR A LOS BENEFICIOS QUE PUDIERA OBTENER EL SOLICITANTE.

La suspensión otorgada respecto de los trabajos de ampliación y mejoramiento de un tramo carretero, no transgrede el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, que han sido definidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Federal, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica (tesis de jurisprudencia P./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 950), ya que las carreteras no pueden ser consideradas como un principio básico de la estructura política del país o de protección y efectividad de las disposiciones constitucionales que dé estabilidad y permanencia a la nación mexicana, ni la concesión de la medida cautelar suspensiva implica una afectación grave a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener el solicitante, pues mientras que con la suspensión de la obra referida se deja de beneficiar a los usuarios del tramo carretero relativo y se preserva la materia de la controversia, con la negativa a otorgarla se presenta el riesgo de que cesen los efectos del acto cuya invalidez se demanda y, por tanto, que queden fuera de control actuaciones autoritarias contrarias al orden constitucional.

Recurso de reclamación 323/2002-PL, deducido del incidente de suspensión en la controversia constitucional 55/2002. Gobernador del Estado de Chihuahua. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada con el rubro: "SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 'INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO' PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.".

Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la ley de la materia, solicito se forme el incidente de suspensión cotejándose los documentos exhibidos con el escrito de demanda, con las copias que de los mismos se exhiben a efecto de que sean tomados en cuenta al momento de proveer sobre la suspensión de los actos materia de la presente controversia.

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL D'
SUPREMA CORTE DE J'
SECRETARÍA GE'
CIÓN DE FRA. 17
INSTITUCI
INCONSTITUC

PRIMERO.- Tener por presentada ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la presente demanda de controversia constitucional, reconociendo la personalidad con la que comparezco.

SEGUNDO.- Estimar procedente y en consecuencia admitir la demanda.

TERCERO.- Tener por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos indicado en el proemio de esta demanda, así como por delegados a los profesionistas mencionados en el mismo.

CUARTO.- Emplazar a la entidad de poder público demanda, así como notificar a los terceros antes señalados.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dé vista al Procurador General de la República.

SEXTO.- Declarar la inconstitucionalidad de los actos cuya invalidez se demanda.

SÉPTIMO.- Se ordene la publicación de la sentencia respectiva en el Semanario Judicial de la Federación, el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial del Estado de Sonora.

Protesto lo Necesario.

México, Distrito Federal a la fecha de su presentación.

JOEL ESCALANTE DÍAZ

050181

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION
SUBSRIA. GRAL. AGDOS.

2012 SEP 11 PM 1 33

2012 SEP 11 PM 12 32

SECCION DE TRAMITE DE
CONTROVERSIAS CONS. Y
DE ACCIONES DE INCONS.

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

RECIBIDO DE ENVIADO.
EU ORIGINAL, EU 65 FOLIAS,
CON:

- 12 anexos en copias certificadas en 6 1 10 1 10 folias, así como en 2 2 1 1 2 2 y 1 páginas.
- Anexo (Dictamen Técnico), notariado, en 39 folias.
- Cuatro anexos (diversos escritos con leyenda de "Recibí") en:
 - 3 folias - con las máculas que presenta.
 - 3 folias.
 - 3 folias.
 - 3 folias.
- 2 diversas constancias en (1) folia cada una.

Así como doce copias de la presente demanda y anexos